SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ASISTENCIA:

PRESIDENTA: SEÑORA MINISTRA:

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

**SEÑORAS MINISTRAS Y SEÑORES
MINISTROS:**

**JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
LORETTA ORTIZ AHLF
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
ANA MARGARITA RÍOS FARJAT
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
(POR GOZAR DE VACACIONES, AL HABER
INTEGRADO LA COMISIÓN DE RECESO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE
SESIONES DE DOS MIL VEINTE)**

(SE ABRIÓ LA SESIÓN A LAS 11:20 HORAS)

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Buenos días, señoras Ministras, señores Ministros. Se abre esta sesión pública del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que integraremos las dos ternas que serán propuestas a la Cámara

de Senadores para la designación de una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señor secretario, dé lectura a las reglas para el desarrollo de esta sesión, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta. La sesión pública, una vez declarada abierta por la Ministra Presidenta, se desarrollará en los siguientes términos:

1. Se dará lectura a las presentes reglas.

2. Las comparecencias señaladas en el punto quinto del Acuerdo Número 5/2023, se llevarán a cabo en los siguientes términos:

2.1. El secretario general de acuerdos ingresará en una urna transparente 9 tarjetas blancas dobladas, en la inteligencia de que en 3 de ellas se indicará el nombre de 2 de los aspirantes y en las 6 restantes, el nombre de 1 de los aspirantes. A continuación, pasará al lugar de cada una de las Ministras y de los Ministros, sin incluir a la Ministra Presidenta, en el orden en el que se ubican de derecha a izquierda en el salón de sesiones del Pleno, para que, sucesivamente, extraigan de dicha urna una de esas tarjetas blancas.

2.2. Enseguida, el secretario general de acuerdos preguntará a cada Ministra y a cada Ministro el o los nombres de los aspirantes anotados en la tarjeta blanca que extrajeron de la urna y, a petición de la Ministra Presidenta, dará lectura al listado en el que se indique el nombre del o de los aspirantes a los que, respectivamente, les formularán las preguntas.

2.3. Los aspirantes comparecerán en estricto orden alfabético en un tiempo máximo de cinco minutos ante el Tribunal Pleno, con el objeto de exponer los puntos que consideren más destacados de su ensayo.

2.4. Al concluir cada exposición, la Ministra o el Ministro al que corresponda en los términos del mencionado sorteo, formulará al aspirante asignado la o las preguntas relacionadas con lo indicado en su ensayo, las cuales deberá responder en un tiempo de hasta cinco minutos.

3. Concluidas las comparecencias, la votación referida en el numeral 3 del punto quinto del Acuerdo Número 5/2023, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

3.1. El secretario general de acuerdos entregará a cada una de las Ministras y de los Ministros tarjetón amarillo previamente sellado por la Secretaría General de la Presidencia para indicar el nombre de las 3 mujeres y de los 3 hombres que conforme a su criterio, cuenten con los mayores méritos curriculares, y con un perfil acorde con las funciones de las personas titulares de las Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3.2. Cada Ministra o Ministro entregará al secretario general de acuerdos el tarjetón referido en el punto 3.1 anterior.

3.3. A su vez, el secretario general de acuerdos entregará a cada Ministra y Ministro lista con once columnas para reflejar la votación que se dé con motivo de la lectura de cada uno de los tarjetones amarillos así como el total de los votos obtenidos por candidato.

3.4. La Ministra Presidenta designará como escrutadores a los Ministros Presidentes de la Primera y de la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

3.5. El secretario general de acuerdos una vez que cuente los tarjetones amarillos entregados por las Ministras y los Ministros los revolverá, los identificará con el número del 1 al 11 y los entregará en orden y de forma alterna a cada uno de los Ministros escrutadores, informando en voz alta el número del tarjetón entregado.

3.6. Cada uno de los Ministros escrutadores, alternadamente, dará lectura a los nombres de los 6 aspirantes, 3 mujeres y 3 hombres, señalados en cada uno de los tarjetones amarillos entregados por las Ministras y por los Ministros. Uno de los Ministros escrutadores leerá el número y el nombre de la o el candidato, y el otro Ministro volverá a leerlo.

3.7. En caso de que en un tarjetón amarillo se indiquen más de 6 aspirantes, la tarjeta respectiva será anulada. Si en una tarjeta dentro de los 6 aspirantes se indica dos o más veces a un mismo aspirante, únicamente se le computará un voto. Si en un tarjeta se incluyen más de 3 mujeres o de 3 hombres, sin superar 6 votos, del género sobrerrepresentado sólo se computarán las personas indicadas en los primeros 3 lugares del tarjetón respectivo. Se anulará un voto cuando no sea factible identificar al aspirante correspondiente.

3.8. Al concluir la lectura de cada uno de los 11 tarjetones amarillos, la Ministra Presidenta consultará a las Ministras y a los Ministros si

están de acuerdo con el cómputo realizado o si tienen alguna objeción al procedimiento y ordenará su destrucción.

3.9. La votación oficial la llevará el secretario general de acuerdos debiendo tomarse en cuenta que la votación plasmada en el sistema informático es únicamente de apoyo.

3.10. Al concluir el registro de los votos señalados en los tarjetones amarillos, el secretario general de acuerdos verificará los resultados obtenidos y leerá los nombres de las candidatas y de los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

3.11. En caso de que exista un empate para ocupar alguno de los últimos lugares de los 3 de mujeres o de los 3 de hombres necesarios para la integración de las listas respectivas, se procederá en los siguientes términos:

3.11.1. El secretario general de acuerdos informará a la Ministra Presidenta, por cada una de las listas por género, los aspirantes que participarán en la siguiente ronda de votación y el número de lugares por los que deberá votarse.

3.11.2. Si es necesario desarrollar el procedimiento de desempate para ambas listas, se iniciará con la votación de la correspondiente a la de las mujeres. Para tal fin, el secretario general de acuerdos ordenará la impresión de una lista en color azul en la que consten los nombres de las candidatas que hayan empatado. Dicha lista se entregará a cada una de las Ministras y de los Ministros.

3.11.3. A continuación el secretario general de acuerdos dará lectura a los nombres de las candidatas que se encuentren empatadas para ocupar alguno de los últimos 3 lugares y mencionará el número de votos que pueden emitirse en esta lista.

3.11.4. Para llevar a cabo la votación respectiva, en la lista impresa en color azul, cada una de las Ministras y de los Ministros marcará el o los nombres de las candidatas de su preferencia que hagan falta para integrar la lista de las 3.

3.11.5. A continuación, se seguirán, en lo conducente, las reglas 3.1 a 3.10.

3.3. Una vez concluida la selección de la lista de las 3 candidatas, de ser necesario para realizar los desempates correspondientes a la lista de 3 hombres, se aplicará, en lo conducente, lo señalado en las reglas 3.11 y 3.12.

4. A petición de la Ministra Presidenta, el secretario general de acuerdos dará lectura a las ternas de mujeres y de hombres, por orden alfabético de su primer apellido, en términos del numeral 5 del punto quinto del Acuerdo Número 5/2023.

5. Posteriormente, la Ministra Presidenta someterá a votación del Tribunal Pleno las referidas ternas.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. En atención al número de Ministras y Ministros presentes, únicamente van a ser diez tarjetones amarillos.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Diez tarjetas amarillas. Muy bien, por favor, ingrese a la urna transparente las nueve tarjetas y enseguida pase al lugar de cada Ministra y Ministro para que extraigan una tarjeta, si es tan amable, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta.

Tarjeta número 1: 1. Fernández Domínguez Marcela Elena y 7. Mosri Gutiérrez Magda Zulema.

Tarjeta número 2: 2. Figueroa Ávila Enrique y 8. Sandoval López Francisco Javier.

Tarjeta número 3: 3. Hernández Rojas Blanca Eladia y 9. Silva Adaya Juan Carlos.

Tarjeta número 4: 4. Lara Patrón Rubén Jesús.

Tarjeta número 5: 5. Maitret Hernández Armando Ismael.

Tarjeta número 6: Martínez Valero Dora Alicia.

Tarjeta número 7: Sumuano Cancino Enrique.

Tarjeta número 8: Valle Aguilasocho Claudia.

Y tarjeta número 9: Villafuerte Coello Gabriel.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Señor secretario, por favor, consulte a cada Ministro y Ministra el nombre o los nombres de los aspirantes anotados en la tarjeta que extrajeron de la urna y, posteriormente, por favor, dé lectura en orden alfabético al listado con la relación correspondiente.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Martínez Valero Dora Alicia.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Figueroa Ávila Enrique y Sandoval López Francisco Javier.

SEÑORA MINISTRA ORTIZ ALHF: Lara Patrón Rubén Jesús.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Hernández Rojas Blanca Eladia y Silva Adaya Juan Carlos.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Sumuano Cancino Enrique.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Valle Aguilasocho Claudia.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Fernández Domínguez Marcela Elena y Mosri Gutiérrez Magda Zulema.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Villa Fuerte Coello Gabriela.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjeta 5. Maitret Hernández Armando Ismael.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señora Ministra Presidenta, me permito precisar:

Número uno: Fernández Domínguez Marcela Elena. Señora Ministra Ríos Farjat.

Número dos: Figueroa Ávila Enrique. Señora Ministra Esquivel Mossa.

Número tres: Hernández Rojas Blanca Eladia. Señor Ministro Aguilar Morales.

Número cuatro: Lara Patrón Rubén Jesús. Señora Ministra Ortiz Ahlf.

Número cinco: Maitret Hernández Armando Ismael. Señor Ministro Pérez Dayán.

Número seis: Martínez Valero Dora Alicia. Señor Ministro González Alcántara Carrancá.

Número siete: Mosri Gutiérrez Magda Zulema. Señora Ministra Ríos Farjat.

Número ocho: Sandoval López Francisco Javier. Señora Ministra Esquivel Mossa.

Número nueve: Silva Adaya Juan Carlos. Señor Ministro Aguilar Morales.

Número diez: Sumuano Cancino Enrique. Señor Ministro Pardo Rebolledo.

Número once: Valle Aguilasocho Claudia. Señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

Número doce: Villafuerte Coello Gabriela. Señor Ministro Laynez Potisek.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Si no hay inconveniente, empezaremos con las comparencias en estricto orden alfabético. Por favor, secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta. Corresponde comparecer a la aspirante número 1, Fernández Rodríguez Marcela Elena.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante con su exposición, por favor.

SEÑORA LICENCIADA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ: Muy buenos días, señoras Ministras y señores Ministros.

Agradezco el voto recibido y el honor de estar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proponer las ideas esenciales que contienen el ensayo que sometí a su consideración en torno de la igualdad y de la inclusión de personas de atención prioritaria, cuya protección es impostergable.

Solicito su confianza en el propósito de refrendar el proyecto de tutela efectiva de los derechos, del apego a la ley, de la ética, de la

independencia, la imparcialidad de los principios democráticos, que deben guiar el diario actuar de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En dicho actuar, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiere preeminencia porque da contenido, sentido y alcance al orden jurídico nacional, en tanto subyacen los elementos de la revisión judicial, como mecanismo para racionalizar el poder, cualquiera que sea su fuente.

Democracia y justicia constitucional son un binomio indisoluble en el Estado contemporáneo. La democracia cada día exige mayor pluralidad y compromiso, en tanto la justicia constitucional protege la ley suprema y da vigencia a la esfera de los derechos. Los criterios elegidos abordan dos grandes temas de la justicia constitucional que impactan de manera directa en la forma de integrar los ayuntamientos y los parlamentos locales mediante el principio de representación proporcional de personas jóvenes y de personas con discapacidad.

Ambos temas son particularmente sensibles en su justiciabilidad, por ende, en su visibilidad y en la reivindicación de los derechos de estos grupos sociales vulnerables. Integrar un ayuntamiento o un parlamento con estos dos grupos en situación de vulnerabilidad es vital para la democracia, dado que esta es la suma de las mayorías con respeto de las minorías. Ya no existe democracia en el mundo actual que sea ajena a estas dos realidades.

En su sentencia, este Alto Tribunal de la Nación estableció un derrotero fundamental: la directriz de la configuración estatal para

regular la representación proporcional de jóvenes en los ayuntamientos, bajo la premisa esencial de estimar que es razonable y proporcional garantizar el acceso a los distintos grupos que conforman la sociedad.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral sustenta la paridad flexible, la cual debe ceder en favor de las personas con discapacidad; lo anterior, toda vez que no resulta irracional ni desproporcionado privilegiar en favor de este grupo en situación de vulnerabilidad el derecho a ser postulados a cargos de elección popular por tratarse de la representación más incluyente y por existir la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para que puedan ejercerse plenamente esos derechos en igualdad.

La democracia encuentra su esencia y fundamento en la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Precisamente por todos estos principios, se requiere de la protección prioritaria que garantice su participación en la vida pública del país a efecto de conquistar espacios para debatir desde sus miradas y hacer propuestas que redunden con su inclusión en la toma de decisiones. Concluyo citando la frase: “Un derecho no es algo que alguien te da; un derecho es algo que nadie te puede quitar” Ramsey Clark, exfiscal general de los Estados Unidos. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias. Por favor, Ministra Ríos Farjat.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Con todo gusto, Ministra Presidenta. En primer término, felicito a todas las personas, no nada más a quienes pasaron esta etapa, eso es una felicitación especial,

sino a todas las que se inscribieron para participar en este proceso, porque no deja de ser un reto fenomenal y una gran tarea para la vida pública de México. Además, haber llegado hasta aquí es un logro, algo muy honroso y meritorio en sí mismo, así que muchas felicidades.

Magistrada, habla usted sobre (y es la base subyacente de lo que menciona) el entorno democrático y plural que existe en México. Ciertamente su tema es especializado, personas con discapacidad y jóvenes, pero a mí me interesa en particular, dado que usted aspira a la Sala Superior, como gran árbitro electoral de México, el cómo lograr la legitimidad de las decisiones del Tribunal Electoral en un entorno democrático de alta pluralidad política y de gran participación, en donde se dan contiendas electorales muy fuertes, muy genuinas. En ese sentido, creo que es una democracia con mucha calidad la que se vive en México. Pero en este entorno, ¿cómo lograr que la opinión pública comprenda que la decisión favorece o no favorece a sus candidatos? Que la sociedad esté tranquila con la decisión que se toma. No me refiero a lo que me parece subyacente y elemental, y que son las buenas decisiones, a cabalidad, conforme al leal saber y entender, sino a cómo comunicar las decisiones para que justamente exista esta sensación de legitimidad de las decisiones de la Sala Superior. Por su respuesta, muchas gracias.

SEÑORA LICENCIADA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que es importante que las sentencias se expliquen por sí solas, esto es, que contengan los argumentos claros, precisos, profundos, guiados por la predictibilidad, esto es, a través de los criterios que vienen

sosteniéndose tanto por este Alto Tribunal como por los propios criterios que ha venido creando la Sala Superior; criterios que (en mi visión) vienen hermanados. Esto es por una parte.

Por otra parte, cuando se trata de aquellos asuntos que tienen alguna particularidad y estos merecen un trato diferenciado, es muy importante destacar las diferencias que estos asuntos tienen con el propósito de que se comprenda el porqué la resolución, aun cuando pareciera debió ser igual a la de un caso anterior, por qué tiene cierta distinción. Cuando se trata de cambios de criterios, es imprescindible el argumentar el porqué el cambio de criterio, pero este es un argumento que tiene que ser mediante una motivación reforzada.

Me parece que nuestras sentencias deben de tener visión y deben de tener prudencia; son sentencias que deben de buscar un equilibrio. Nosotros defendemos la Constitución y nos apegamos a la ley, pero en relación a una realidad, y en esta realidad tenemos que encontrar las palabras correctas y justas que convenzan, que den confianza en la sociedad para lograr la estabilidad social.

Una sentencia que no logra la estabilidad social, sino que genera un problema mayor, es una sentencia que debemos cuestionarnos si realmente estaba resolviendo siquiera el conflicto mismo sometido a nuestra potestad. Me parece que, en esta parte, resulta imprescindible el profesionalismo, el estudiar no solamente todo lo que tenemos en tratándose de la doctrina judicial, sino también recurrir a la doctrina extranjera.

Tenemos, hoy en día, la obligación de estar al día en relación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, estudiar todo lo que está en nuestras manos y ser claros en las sentencias. La claridad no significa sentencias gigantescas, significan sentencias que convenzan y que comuniquen a la sociedad. Esta es la... mi respuesta, señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Muchas gracias, magistrada. Gracias, Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias.

SEÑORA LICENCIADA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 2, Figueroa Ávila Enrique.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Sea tan amable de presentarnos su ensayo, por favor.

SEÑOR LICENCIADO FIGUEROA ÁVILA: Con mucho gusto, señora Ministra Presidenta, señoras Ministras, señores Ministros. Es un privilegio comparecer ante el más Alto Tribunal de mi país en la presentación de esta aspiración para integrarme, eventualmente, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Respalda esta aspiración más de veinticuatro años de servicios ininterrumpidos en la justicia electoral, más de una década como

profesor universitario proposición de la materia de derecho electoral en la facultad de derecho de la UNAM, en la Universidad de Anáhuac, en la Escuela Judicial Electoral, entre otras instituciones universitarias. Precisamente, esa experiencia me ha permitido observar importancia de saber trabajar en colegiados, la importancia del acceso a la justicia electoral y que la imparcialidad y la independencia son los sellos que legitiman cada una de nuestras sentencias.

Precisamente, esa experiencia me permitió concentrar el ensayo que sometí a su distinguida consideración respecto al acceso a la justicia; esto, a partir de un criterio de este Alto Tribunal con relación a las personas legisladoras y un criterio del Tribunal Electoral respecto a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad 62/2022 y su acumulada, este Alto Tribunal determinó declarar la invalidez del inciso h) del párrafo 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esencialmente, por tratarse de una causal de improcedencia redactada en términos absolutos que impedía a las personas legisladoras tener la posibilidad de controvertir cualquier acto o decisión del Congreso, de la comisión permanente o de cualquiera de sus Cámaras. Medularmente, el argumento central fue que este artículo, al estar redactado en términos absolutos, hacía irrecurrible cualquier acto o decisión del Congreso, de la comisión permanente o de cualquiera de Cámaras, por supuesto, desobedeciendo al artículo 17 de la Constitución General de la República.

En el segundo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación observó que, si bien desde el año dos mil catorce se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cierto es que no se adecuó nunca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece una regla para procesos electorales en el contexto de sistema de partidos políticos y candidaturas independientes, que estriba y que dicta, en esencia, que dentro de los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.

La Sala Superior consideró que, tratándose del tema de la oportunidad, de las demandas planteadas por los pueblos y comunidades indígenas este tema de la oportunidad tiene que ser revisado casuísticamente, mientras que la Sala Regional Xalapa consideró que podía obtenerse una regla general: descontar los sábados y los domingos y los días inhábiles previstos en la ley, precisamente, por las particularidades de nuestros pueblos y comunidades indígenas. A partir de esto, se derivó una contradicción de criterios y el criterio prevaleciente fue la suma de los criterios tanto de la Sala Xalapa como de la Sala Superior (me parece) en abono al acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas.

Señoras Ministras y señores Ministros: estoy convencido que el acceso al acceso de la justicia es un valor esencial de toda sociedad democrática. Por un lado, la sentencia de este Alto Tribunal, reconociendo que en el proceso deliberativo es muy importante que las mayorías escuchen a las minorías y, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconociendo que si México es una nación pluricultural, en donde su base se sustenta

en la diversidad cultural, los operadores jurídicos tenemos que ser especialmente cuidadosos en evitar cualquier modelo asimilacionista.

Señoras Ministras y señores Ministros: desde el año dos mil dieciséis me sumé a los trabajos de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral. He podido constatar todos los días la importancia para los justiciables de que cada sentencia esté sellada con la legitimidad y la imparcialidad de los tribunales electorales. Si ustedes tienen a bien respaldar mi aspiración, este es un momento muy propicio para refrendar ese compromiso que, como juzgador, he protestado a observar. Muchísimas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministra Esquivel, por favor.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Gracias, Ministra Presidenta. Me sumo a las felicitaciones que hizo la Ministra Margarita Ríos Farjat a las integrantes y los integrantes en este proceso tan importante para la elección del próximo y próximos magistrados de la Sala Superior del tribunal federal electoral.

Señor Magistrado Enrique Figueroa Ávila, en su ensayo aborda usted un tema relativo a la procedencia de los medios de impugnación en materia electoral; un tema muy importante con relación a los actos parlamentarios. Usted hace referencia (como ya lo señaló) en la acción de inconstitucionalidad 62/2022, en que el que el Tribunal Pleno declaró la invalidez de este inciso h), numeral 1, del artículo 10 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este precedente, se sustentó la invalidez, esencialmente, en que la norma resultaba absoluta y sobreinclusiva al vedar cualquier forma de judicialización de los actos internos del Congreso. Nos parece un tema fundamental esta delimitación entre el derecho parlamentario y la judicialización en materia electoral.

El Tribunal Pleno determinó que la invalidez no significaba que todos los actos intraparlamentarios deban ser justiciables exclusivamente a través de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta delimitación corresponde a hacerse caso por caso, dijo el Tribunal Pleno, atendiendo a las reglas procesales correspondientes sin prejuzgar la procedencia de algún otro medio de impugnación como mecanismo para combatir los actos internos del Congreso.

Respecto a esto, le pregunto: ¿cuál es su opinión con relación al acto parlamentario consistente en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y hasta dónde se delimita la intervención del Tribunal Pleno, de su Sala Superior, en los actos de carácter parlamentario? Gracias por su respuesta y muchas felicidades.

SEÑOR LICENCIADO FIGUEROA ÁVILA: Muchas gracias, señora Ministra, por su pregunta.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Gracias, Magistrado.

SEÑOR LICENCIADO FIGUEROA ÁVILA: Porque, efectivamente, esta acción de inconstitucionalidad me parece que construye un

paradigma respecto al acceso a la justicia, tratándose de las personas legisladoras integrantes del Congreso de la Unión, de cualquiera de sus cámaras o de la Comisión Permanente.

Efectivamente, esta acción de inconstitucionalidad 62/2023 fue una sentencia aprobada por este Alto Tribunal, en donde se puede observar que hay un voto particular formulado por usted, señora Ministra, con una temática que me parece muy relevante, que debió y que fue examinada por este Alto Tribunal, cuando se planteaba si, con respecto al acceso a la justicia de las personas legisladoras, los artículos 60 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe reconocérsele al Congreso de la Unión un ámbito de atribuciones específico, sobre todo, porque la ley que regula al Congreso es una ley que no es promulgada por el señor Presidente de la República, lo cual podríamos reconocer un espacio específico de actuación, sobre todo, para el Congreso de la Unión y, por supuesto, esto en la lógica también del respeto a la soberanía y de la no invasión de poderes.

También, en esta acción de inconstitucionalidad puedo apreciar un voto concurrente de la señora Ministra Margarita Ríos Farjat, en el sentido que ella cuestionaba: si no es que esta causal de improcedencia también podría efectuar, eventualmente, no solamente a las personas legisladoras, sino al juez, cualquier ciudadana o ciudadano que, eventualmente, quisiera cuestionar cuando una legisladora o legislador resultara afectado en la representación derivada, precisamente, del sufragio pasivo.

Me parece que es un criterio muy importante porque, efectivamente, me parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación es un tribunal que no es ilimitado; es un Tribunal que tiene que ser respetuoso del ámbito de atribuciones de los poderes esenciales de la Unión. Esto es, reconocer que el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, este Alto Tribunal, cada uno cumple su función y tiene que ser muy cuidadoso en permitir que cada uno de los poderes cumpla adecuadamente sus funciones, sin generar, por supuesto, el colapso y, mucho menos, generar distensiones innecesarias en el trabajo de cada uno de los poderes respectivos.

Por eso, me parece que, efectivamente, en estos asuntos, en donde este Alto Tribunal ya reconoció la posibilidad de que, casuísticamente, se tiene que ir revisando caso por caso, el Tribunal Electoral tendrá que ser sumamente cuidadoso y no convertirse en un tribunal ilimitado, sabiendo de antemano que es uno de los operadores jurídicos que cumple la función de ser guardián de la Constitución, pero también que debe permitir y reconocer que el Congreso es el órgano representativo. Es el órgano que está democráticamente legitimado y que, por supuesto, también la mayoría que vota por esos legisladores tienen una propia percepción de la Constitución.

Los tribunales, efectivamente, somos guardianes de la Constitución, pero no somos los únicos que tenemos la capacidad de darle su contenido y, en ese sentido, me parece que los tribunales tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables cuando observemos cuál es la temática que se plantea y que esto, por supuesto, respete el *ius in officium* de las legisladoras y los legisladores, así como también se respete el oficio representativo que les corresponde

como integrantes de los congresos o de las cámaras respectivas.
Gracias, señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Muchas gracias, Magistrado. Gracias, Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 3, Hernández Rojas Blanca Eladia.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Buenas tardes. Adelante con la exposición de su ensayo.

SEÑORA LICENCIADA HERNÁNDEZ ROJAS: Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con el respeto que me merece este Máximo Órgano Constitucional de Justicia de nuestro país.

Ministra Presidenta, Ministras y Ministros: me siento honrada, honrada. Los tiempos (digo yo) siempre son los exactos, y este, señores Ministros, señoras Ministras, para mí es uno de ellos. Infinitas gracias.

Los temas torales sobre los que versó mi ensayo, que tuve a bien poner a su consideración (desde mi opinión), son trascendentales en nuestro país. Por un lado, paridad total y, por otro, violencia política contra las mujeres en razón de género.

Ustedes, en la acción de inconstitucionalidad 273/2020, este Alto Tribunal ratificó y validó en esa acción de inconstitucionalidad la

facultad discrecional y potestativa que tienen los presidentes de los OPLEs, como órganos constitucionalmente autónomos para designar a sus secretarías ejecutivas, direcciones y unidades, y el otro criterio que llamó mi atención y que fue una contradicción de criterios entre Sala Superior y Sala Regional Toluca, lo fue el 12/2000, la jurisprudencia 12/2021. Con este criterio, Sala Superior determina y nos da claridad, al menos a todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, cuál es la vía para recurrir cuando se cometa el flagelo de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Señores y señoras Ministras: en esta acción, (desde mi opinión) ustedes enaltecieron esa libertad configurativa que tienen los Congresos de los Estados, las entidades federativas a nivel República y, por otro lado, dejaron claro esa facultad discrecional que tienen los presidentes de los organismos locales en las entidades. Si bien este principio (o este) de paridad total, que nació a raíz de la reforma que se dio el seis de junio del año dos mil diecinueve, en su parte transitoria establecía que las entidades federativas deberían procurar que se implementara este principio, ya lo tenían los institutos políticos, los partidos políticos al postular a sus candidatos, ahora lo llevamos a los órganos públicos no solo Ejecutivo, sino también el judicial a nivel federal y a nivel local, pero también se extiende a los órganos constitucionalmente autónomos. Ustedes clarificaron (y lo hicieron bien) el tema de que este principio es para las titularidades de estos órganos, tanto OPLEs como tribunales. Creo (yo) es un criterio por demás orientador y nos definió y nos dio claridad a nosotros, como autoridades jurisdiccionales, administrativas y locales.

En el tema de la jurisprudencia 12/2021 nace a raíz o viene, creo (desde mi opinión), a raíz de la reforma que se da el trece de abril de dos mil veinte, una gran reforma y, desde mi punto de vista, trascendental en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero había confusión, señoras Ministras y Ministros. ¿Por qué? Porque, si bien se hicieron reformas a leyes generales y se hizo un espejo en las entidades federativas, no definía claramente por qué vía debería recurrir la mujer cuando se daba este flagelo.

Sala Superior determinó de manera clara cuándo debemos de ir por vía recurso ciudadano y cuándo con queja o denuncia a través del procedimiento especial sancionador. Son dos criterios (desde mi punto de vista) y, desde lo local, que nos dieron claridad a las autoridades administrativas y locales. Agradezco infinitamente toda su atención y agradezco el hecho de estar frente a ustedes. Gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias. Ministro Aguilar, por favor.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señora Ministra Presidenta. Yo también me uno a la felicitación a usted y a todos los que están compareciendo hoy ante esta Suprema Corte, buscando integrar un tribunal que es fundamental en la vida constitucional de nuestro país y que tiene el gran compromiso de decidir los criterios electorales que habrán de regir nuestra vida democrática y, entre ellos, el fundamental, que es decidir sobre la validez de una elección, como es la del Presidente de la República.

Yo creo que es muy importante que ustedes estén participando aquí y que, con su exposición y validez de sus precedentes, de su experiencia, sean legítimos aspirantes a integrar este tribunal.

Dentro del estudio que usted nos presentó hay cosas muy interesantes, como las que nos acaba de señalar y, al final de su estudio, plantea la forma en que se pueden impugnar los actos que puedan considerarse de violencia política por razón de género, y señala que son dos los que se pueden hacer: uno, para reponer o corregir la violencia de género en materia electoral y, otro, para sancionar al funcionario que lo haya hecho.

¿Considera que ese es el mejor camino o que debería existir un procedimiento unificado para lograr estos fines? Me gustaría que, brevemente, nos ampliara su idea al respecto.

SEÑORA LICENCIADA HERNÁNDEZ ROJAS: Gracias, señor Ministro. Finalmente, qué bueno que tenemos la oportunidad de este tiempo para dar contestación.

Ha sido un camino muy largo en la lucha de los derechos de las mujeres, de todos los derechos, pero los políticos-electorales (creo yo) en dos mil diecinueve y dos mil veinte fueron de gran trascendencia y de gran avance. Que nos establezcan y que quede claro para nosotros que cuando se quiera o nosotros como juzgadoras y juzgadores debemos de ver la queja, la denuncia o el juicio ciudadano, y debemos de ver cuál es la pretensión que quiere la impetrante, y nosotros determinar, en su caso, si le vamos a restituir un supuesto derecho político-electoral vulnerado, saber si sí tiene este alcance para que se presente mediante juicio

ciudadano. En la contradicción de criterios que tuvo Sala Regional Toluca con Sala Superior, Sala Toluca determinó, en su momento, que tendría que, necesariamente, primero ir mediante queja o denuncia a través del procedimiento especial sancionador, que lo conocen las autoridades administrativas y, por otro lado, Sala Superior dijo que no era un requisito *sine qua non* estar primeramente conociendo la denuncia o la queja y, posterior, venir al juicio ciudadano. Creo que podemos, quienes, en su momento, o quienes se sientan laceradas por esto podemos acudir simultáneamente en los dos, en lo administrativo y en lo jurisdiccional, y determinar qué es lo que nos están pidiendo o de qué se están doliendo o cuál es el agravio, y nosotros determinar, pues, en su momento restituirle su derecho que se está vulnerando a decir de la impetrante, o sancionar o inhabilitar jurídicamente a quien sea el responsable de esto. Muchísimas gracias, Ministro.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias. Gracias, Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias, a usted. Muchas gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 4, Lara Patrón Rubén Jesús.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante con la exposición de su ensayo.

SEÑOR LICENCIADO LARA PATRÓN: Gracias, Ministra Presidenta. Señoras Ministras, señores Ministros. Yo también

agradezco la oportunidad de estar ante este Pleno. Es un altísimo honor poder comparecer ante ustedes.

La tarea de los tribunales constitucionales es garantizar que las decisiones políticas fundamentales establecidas en la Ley Suprema tengan plena eficacia y sean debidamente observadas y atendidas tanto por los órganos del Estado, que se encargan de materializarlas, como por las personas en favor de quienes se establecen.

Una de las funciones primordiales de los órganos jurisdiccionales que desarrollan tareas de control de constitucionalidad es garantizar, desde el derecho, que existan condiciones necesarias para favorecer el ejercicio pleno de las libertades de las personas. Esta competencia es primordial para el debido funcionamiento del Estado, pues, desde una concepción sustantiva, los derechos fundamentales legitiman la democracia, en tanto establecen límites al ejercicio del poder, los cuales hacen posible que se materialicen valores como la libertad, la igualdad, el pluralismo y la seguridad jurídica, que son pilares del orden social.

La tutela y el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas también resulta esencial para el desarrollo de la democracia, entendida ahora desde una dimensión formal, sobre todo, si se tiene en cuenta que, a través de ella, se concreta una potestad soberana del pueblo, específicamente, determinar quién llevará a cabo las funciones de gobierno en su nombre y representación. De esta suerte, los órganos jurisdiccionales están llamados a dar coherencia a los mandatos constitucionales que

rigen los procesos de participación política para garantizar su efectividad.

A propósito de lo anterior, me importa tener presente que la primera condición del Estado democrático es la existencia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que tenga la oportunidad real de participar en el debate público y en las decisiones de interés general y, para que esto sea posible, resulta determinante que se garantice en su favor un espacio amplio de libertades, entre las cuales la de expresión juega un papel de trascendencia especial. Esto porque, en un Estado libre, el pensamiento y la palabra tendrán que ser igualmente libres y, en el ámbito político-electoral, deben poder expresarse y difundirse con enorme intensidad para lograr un tránsito vigoroso de ideas y opiniones, que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas.

En la actualidad, este derecho ha encontrado una herramienta que favorece su ejercicio en las nuevas tecnologías de comunicación, que posibilitan la existencia y difusión de múltiples materiales, amplían el espacio de participación, generan un intercambio incesante y, por ende, un acceso sin precedentes a la información, facilitan una interacción estrecha entre las personas y, por todo lo anterior, se constituyen como potenciadoras de un debate político sólido y de altura. Así, estas nuevas tecnologías juegan un papel fundamental para la libertad de expresión y se han convertido en instrumentos poderosos al servicio de la democracia y, por tanto, los contenidos que se socializan a través de ellas gozan de una protección reforzada. No obstante, con independencia del mecanismo que se use para ejercerla, la libertad de expresión debe articularse con otros principios de rango constitucional, cuya

observancia resulta indispensable para garantizar el orden público, como (por ejemplo) los que sostienen el modelo de comunicación política, a través de los cuales se busca evitar una competencia asimétrica entre quienes participan en los procesos democráticos.

Lo indicado justifica la intervención jurisdiccional encaminada a orientar los contenidos que se difunden a través de las herramientas tecnológicas con la finalidad de evitar que desatiendan las reglas de las contiendas democráticas y, como consecuencia, se produzcan efectos perniciosos en los espacios de decisión ciudadana; sin embargo, esta intrusión debe ser mínima y sus repercusiones serán producto de una prudente ponderación, pues (como mencioné) el ejercicio pleno de la libertad de expresión resulta vital para la existencia misma de la democracia y, por tanto, acotarla será una posibilidad excepcional, solo justificable en aras de proteger alguno más de los principios constitucionales con los que se relaciona.

En mi opinión, lo expuesto revela la relevancia de la jurisdicción constitucional para la construcción y consolidación de la forma de gobierno mencionada y pone manifiesto que su labor en torno al tema desarrollado debe encaminarse a generar certeza respecto del uso de las tecnologías en los procesos de participación ciudadana, ajustar el discurso político-electoral a los parámetros establecidos en la Constitución, asegurar el cumplimiento de los principios que sostienen el modelo democrático en ella desarrollado y, consecuentemente, elevar la jerarquía del debate público para fortalecer la calidad de nuestro sistema político. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministra Ortiz, por favor.

SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: Gracias, Ministra Presidenta. Igual que mis compañeras y compañeros Ministros, me sumo a las felicitaciones y al reconocimiento a todos ustedes por estar aquí en este proceso de nombramiento de los futuros, después de (ahora sí) de ser seleccionados por el Senado de la República y de nuestra integración; decisión que tomemos hoy, su integración a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Bueno, mi pregunta parte a raíz de su trabajo y se centra en que, si para usted existe una diferencia entre, o relación entre el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y cómo impactan estos dos derechos en un modelo de comunicación democrática y de participación ciudadana.

SEÑOR LICENCIADO LARA PATRÓN: Muchas gracias, señora Ministra, por sus comentarios y por la pregunta. Yo entiendo que sí existe una relación muy fuerte entre estos derechos y no solo entre estos derechos: también entre la libertad de expresión y la transparencia, por ejemplo. En fin, varios derechos en el ámbito democrático, en el ámbito político-electoral, y todo va encaminado a lograr generar una serie de condiciones que permitan desarrollar de manera efectiva esta posibilidad soberana que tienen las personas de decidir (como decía en mi participación) quién va a ocupar un cargo público. La idea del modelo de comunicación política (por lo menos, como le entiendo yo) tiene que ver con la posibilidad de poder expresar cualquier información, cualquiera que sea útil, que sea relevante para que la ciudadanía pueda tomar una decisión con todos los elementos necesarios, ¿no?, para que esta sea lo más informada y (digamos) lo más objetiva posible. Y un poco en esta lógica, la idea de la libertad de expresión, pues, adquiere

una relevancia superlativa y, en principio, se permitiría que el tránsito de información relacionada con este derecho en los procesos político-electorales sea no solo intensa, sino contundente, por eso hay criterios de este Tribunal Constitucional, de la Sala Superior, de tribunales internacionales, en donde se permite que se dé información que no sea necesariamente agradable, que sea fuerte, que sea crítica, ¿no?, pero también se han establecido una serie de límites en relación con las posibilidades que se tienen para ejercer el derecho, que están dentro de este modelo de comunicación política y que me parece que responden a esta necesidad de establecer una información equilibrada, objetiva y responsable (diría también).

En esta lógica, dentro de los límites que me parece que pueden encontrar cabida en el ejercicio de este derecho está, precisamente, el derecho a la intimidad, ¿no? Desde luego, no es posible, diría yo que ni siquiera es pertinente para una contienda política que se toquen temas que, de pronto, puedan afectar las cuestiones personales o las cuestiones íntimas de otros sujetos que estén relacionados en esta contienda. Pienso un poco que también esta situación depende mucho de la lógica con la que se aborde la libertad de expresión dentro de cada país, y esto lo refiero porque, por ejemplo, en Europa, en donde las redes sociales están reguladas o entendidas como un servicio público, se han empezado a establecer una serie de lineamientos y de leyes, incluso, en donde se regula el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, en las redes sociales hay una ley de servicios digitales, y ahora mismo se empieza a discutir en el parlamento europeo una ley de inteligencia artificial, donde los espacios vedados y protegidos (digamos) de manera especial tienen que ver, justamente, con esta posibilidad de

intimidad, de transparencia; en fin, en relación con (insisto) cualquier sujeto que pueda participar, porque participar no solamente (digamos) activamente en la elección, sino también como alguien que recibe la información, porque (insisto) lo que se busca es sí que hay un tránsito vigoroso, que hay un tránsito intenso, pero que este tránsito no lesione o no vulnere los derechos de otras personas involucradas en este ejercicio democrático.

Y me parece que esta es una de las funciones primordiales del órgano jurisdiccional, no solamente la Sala Superior, sino las distintas Salas del Tribunal, en el caso específico, la Sala Especializada podría ser un buen ejemplo, en donde lo que se busca es, precisamente, (insisto) elevar, ¿no?, la calidad del debate público y, para hacerlo, no se necesita, forzosamente, abordar esta serie de puntos. Entonces, sí creo que hay un equilibrio y me parece que la intimidad puede ser uno de los límites al derecho a la libertad de expresión de los procesos electorales. Sería cuanto. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 5, Maitret Hernández Armando Ismael.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante, por favor.

SEÑOR LICENCIADO MAITRET HERNÁNDEZ: Buenas tardes, señoras Ministras, señores Ministros. Es un gran honor poder ser evaluado por este Tribunal Constitucional. El ensayo que presenté

aborda el tema de las noticias o la información falsa y la libertad de expresión a la luz de la necesidad de tutelar los principios de equidad en la contienda electoral y la libertad de sufragio. Para ello, utilicé las sentencias de la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 143/2018.

¿Por qué es importante el tema (desde mi punto de vista)? Porque, al igual que la autoridad electoral nacional y algunas instancias en el mundo, como el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, me preocupa la influencia que puede tener en las elecciones la difusión masiva de noticias falsas, particularmente en Internet y en las redes sociales y, a partir de una falsa apreciación de la realidad, se podrían provocar impactos en las elecciones al generar cambios en la opinión de las personas o evaluaciones sesgadas, que distorsionan los hechos y preferencias electorales, lo cual, eventualmente, pudiera tener un impacto considerable en el voto libre e informado de las personas.

¿Qué aportan las sentencias que se analizan para revisar el problema? Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior focalizan la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia moderna y establecen parámetros importantes para su protección desde una concepción liberal, pues, a través de su ejercicio, se brinda la información a la ciudadanía para poder participar en el debate público, ni más ni menos, para participar en la democracia, además de que contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que las y los ciudadanos tengan la información necesaria para emitir un voto razonado.

Por ello, es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por el pleno ejercicio de la libertad de expresión que el riesgo que conlleva una restricción general a dicha libertad; sin embargo, la interpretación constitucional que desarrollan (en mi opinión) tanto la Sala Superior como esta Corte dan las bases conceptuales para atender el fenómeno de la información falsa en los procesos electorales. En otras palabras, frente al fenómeno que preocupa existe ya en México un marco conceptual y jurídico que permitiría atenderlo si se llegara a presentar.

¿Qué elementos debieran tenerse en cuenta en el análisis, entonces? Como la prohibición de la calumnia establecida en la Constitución protege el sano desarrollo de las contiendas electorales y, al ser una restricción constitucional a la libertad de expresión, la interpretación debe ser estricta; sin embargo, la Sala Superior reconoce que puede haber excepciones para que personas físicas o morales privadas puedan ser sujetas activas de esta prohibición constitucional cuando se demuestre que participan en grado de complicidad o coparticipación con los sujetos obligados.

Para el análisis, desde luego, me parece que se tiene que incorporar la doctrina de la real malicia o malicia efectiva que ha desarrollado este Tribunal Constitucional inspirado en el caso “New York Times Vs. Sullivan” de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y que retoma la Sala Superior para establecer consecuencias jurídicas a alguien por la difusión de información falsa, para lo cual es indispensable, siguiendo un alto estándar probatorio: 1) que no solo se demuestre que la información falsa se difundió, sino que,

además, se difundió a sabiendas de que era falsa y que se tuvo una intencionalidad de dañar el proceso electoral.

Este alto estándar me parece que aplicaría en los supuestos que preocupan, en la medida en que dicha doctrina lo que pretende hacer es más potente la libertad de expresión, que es la piedra angular de la democracia.

Termino agradeciendo esta oportunidad, señoras Ministras, señores Ministros, con el compromiso de seguir sirviendo a nuestra República. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias. Ministro Pérez Dayán, por favor.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señora Ministra Presidenta. Maestro Maitret, reciba de mi parte una felicitación y extensiva al resto de quienes participan en esta etapa.

Leyendo con atención el análisis que hace usted de dos importantes fallos y la manera en que son expuestos ante este Alto Tribunal, advierto la importancia del tema: la noticia falsa y la libertad de expresión.

Desde luego que significa un reto. Se hace un preciso análisis respecto de la decisión tomada de algún modo coincidente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta Suprema Corte sobre la importancia de la real malicia para poder llegar a considerar que la difusión de una noticia falsa se convertirá en una calumnia electoral cuando quien la

difunde tiene el conocimiento de su falsedad, y eso, tratándolo de llevar hacia las redes sociales, que son, por su naturaleza misma, abstractas, parecería concluir el ensayo sobre la necesidad de mantener el requisito de real malicia para poder considerar, finalmente, que se está frente a una calumnia electoral que afecta el proceso electoral, desde luego. Y la abstracción significa mucho, lo importante será buscar a quién sancionar, en la medida en que la libertad de expresión pondrá una principal oportunidad, dado que las redes sociales no son más que eso: el ejercicio de una libertad de expresión. Si la difusión de estas noticias falsas corriera a cargo de las propias autoridades de gobierno, ¿también sería necesario demostrar una real malicia, bajo la premisa de que las entidades de gobierno no pueden participar, de ningún modo, en un tema electoral?

SEÑOR LICENCIADO MAITRET HERNÁNDEZ: Gracias por la pregunta, señor Ministro. Es una pregunta muy interesante; pero, además, de muchísima profundidad, y yo parto de lo que nos enseñan cuando estudiamos derecho constitucional: las autoridades, en cuanto a su libertad de expresión, tienen acotados los derechos, es decir, los ciudadanos o para la ciudadanía gozamos de una amplia libertad de expresión, y la Constitución lo garantiza, y todos los fallos que ha emitido esta Supremo Corte o los diversos tribunales federales tienden a proteger y potenciar el ejercicio.

Tratándose de las autoridades, me parece que el estándar podría cambiar. No se refiere ni la Corte ni el Tribunal Electoral a que puedan, por supuesto, ser sujetos activos de la calumnia autoridades. Recordemos que el artículo 41, base tercera, inciso c),

de la Constitución establece como sujetos activos de la comisión de esta calumnia electoral a los partidos y las candidaturas. La Sala Superior amplía o abre la posibilidad que, de manera excepcional, las personas privadas puedan ser sujetos activos, y establece que, para ellos, como los destinatarios (digamos) de esa información falsa sería incidir en los procesos electorales o en las candidaturas, pues el estándar se eleva, es decir, hay que probar de manera fehaciente la falsedad de la información: que se hizo la difusión sabiendo de que era falsa y, además, con el ánimo de provocar.

En mi opinión, el estándar con que se tiene que calificar la actuación de la autoridad electoral es otro. Es, por supuesto, el artículo 41 constitucional quien prevé quiénes pueden participar en la política y las prohibiciones que el artículo 134 constitucional prevé para que las autoridades de toda índole se involucren en los procesos electorales.

Entonces, contestando a su pregunta, en concreto, me parece que no sería un estándar aplicable a las autoridades o a los titulares de las autoridades que, de manera indebida, se entrometieran en los procesos electorales a través de la difusión de información falsa, y esto es muy relevante porque la ciudadanía tiene la necesidad de recibir información veraz para estructurar un voto razonado y libre. Si esto se trastoca, me parece que se puede poner en riesgo la autenticidad del sufragio. Muchas gracias, señor Ministro. No sé si contesté.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias. Gracias, señora Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias, Ministro. Muchas gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer a la aspirante número 6, Martínez Valero Dora Alicia.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante con la exposición de su ensayo.

SEÑORA LICENCIADA MARTÍNEZ VALERO: Buenas tardes, Ministra Presidenta, Ministras, Ministros. Es un honor estar frente a ustedes para exponer las motivaciones que me inclinan a postularme como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asumiendo con plenitud la distinción y la responsabilidad de lo que implica ser una jueza constitucional.

Aharon Barak decía que el principal papel de un juez constitucional consiste tanto en la búsqueda como en el ferviente deseo de preservar el carácter democrático del Estado. Invoco la cita porque encuentro motivo y respuesta al propio cuestionamiento sobre cuál es mi objetivo de acudir a esta comparecencia.

La defensa de los derechos humanos y de la democracia han orientado mi vida y mi quehacer profesional. He sido parte de la construcción y puesta en marcha del marco jurídico constitucional, que permite la maximización de estos derechos y el fortalecimiento de sus instituciones.

Mi perfil combina la práctica jurídica en distintos ámbitos: con especialización en derechos humanos y en derecho electoral desde una visión constitucional y convencional, ejercida con objetividad e imparcialidad, prudencia, certeza, independencia, principios todos de la ética judicial.

Desde mi trayectoria, he advertido que los derechos humanos están constantemente amenazados, y en ese contexto es que este Poder Judicial toma mayor relevancia ante la sociedad no solo para invocarlos, sino para que se respeten; no solo para reconocerlos, sino para ampliarlos y maximizarlos.

Con esa perspectiva y con esa idea de función judicial, elegí para mi ensayo la acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con el voto en prisión preventiva. La acción de constitucionalidad es la 38/2014 y sus acumuladas y, con relación a la Sala Superior, elegí el juicio de la ciudadanía 352/2018 y su acumulado.

La prisión preventiva se debe tomar en cuenta los efectos que provoca el principio de presunción de inocencia, como regla del trato procesal en el sistema penal acusatorio. El cumplimiento de esta medida cautelar no provoca *per se* y de manera generalizada una limitación material al ejercicio del voto; entender lo contrario sería tanto como generar una pena anticipada y dejar sin contexto a esa prerrogativa.

Este Tribunal en Pleno, al analizar la modificación hecha por el Congreso del Estado de Nuevo León al artículo 8 de la ley electoral, mediante una interpretación conforme determinó que era constitucionalmente válida porque la restricción al derecho es solo

aplica... del derecho al voto es solo aplicable cuando existe una sentencia firme y se haya demostrado la culpabilidad de la persona.

Por su parte, la Sala Superior estableció que el Estado tiene la obligación de implementar acciones que permitan a las personas en prisión preventiva ejercer su voto. Al tratarse de una medida cautelar, se debe maximizar el derecho acorde a los estándares constitucionales y convencionales, pues sigue vigente la presunción de inocencia y por eso se vinculó al Instituto Nacional Electoral para que hiciera pruebas piloto. El voto en prisión preventiva puede verse desde muy diferentes perspectivas y nos hará cuestionar un sinnúmero de cosas y situaciones alrededor de garantizar este derecho político-electoral, pero era necesario dar un primer paso: maximizar el derecho y consolidar su materialización.

Señoras Ministras, señores Ministros: convencida que proteger y garantizar los derechos humanos son la primera obligación de un juez o una jueza en materia electoral, esa es la axiología que debe privilegiar el juzgador porque la base de la paz social, como obligación del Estado, es garantizar el voto, como principio máximo en una sociedad democrática, representativa y plural, así como el principio... el acceso principal de este derecho a la justicia electoral. Estoy segura que, de ocupar una magistratura en la Sala Superior, mi visión integral, derivada de la experiencia en el ejercicio de distintos ámbitos del derecho, harán que tenga la sensibilidad y la empatía para entender los planteamientos de las partes e impartir justicia. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministro González Alcántara, por favor.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ:

Muchísimas gracias, Ministra Presidenta. Maestra Dora Alicia Martínez Valero, le felicito por estar aquí, igual que a todos los que han participado. Les deseo un gran éxito en el procedimiento.

En su ensayo usted desarrolla argumentos en torno al derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva. ¿Podría elaborar su postura en cuanto a la interpretación que ha hecho el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el artículo 38, fracción II, de la Constitución, así como la que realizó la Sala Superior sobre dicho precepto? ¿Es una preferible sobre la otra? Asimismo, ¿podría explicarnos cuál es su postura respecto a las restricciones constitucionales a los derechos fundamentales y, en materia electoral, a la posibilidad de ser votado, es decir, elegido para las personas que se encuentran en prisión? Por su respuesta, le agradezco mucho.

SEÑORA LICENCIADA MARTÍNEZ VALERO: Agradezco mucho su pregunta, Ministro González Alcántara.

Me parece que es fundamental que, derivado justamente de todo el bagaje que ha construido tanto esta Corte como el Tribunal, pero principalmente esto ya que este Alto Pleno, ya que me lo pregunta es: ¿hay que maximizar los derechos? Y creo que esta Suprema Corte ha maximizado esos derechos al permitir, en una serie de sentencias, que haya un voto en prisión. En un primer momento cerca del dos mil nueve, este Tribunal señaló que se podía votar desde la prisión, pero no había la forma o la posibilidad de materializar ese derecho. Posteriormente, este Alto Pleno ha venido avanzando en eso y creo que eso ha permitido que se pongan en

práctica no directamente a través de la vinculación de esta Suprema Corte, sino, más bien, de lo que derivó la Sala Superior, pero los criterios han sido siempre en favor de maximizar el derecho, y yo coincido con esa parte: yo coincido en el sentido de que tenemos que maximizar el derecho y, luego, empezar a ver cómo se va poniendo en práctica este derecho porque no es una situación sencilla. Es una situación bastante compleja.

Hoy en día, hay alrededor de doscientos ochenta mil presos en todo el país. De esos, alrededor de entre el 39% (treinta y nueve por ciento) y el 41% (cuarenta y uno por ciento) tiene prisión preventiva. Entonces, estamos hablando alrededor de cerca de noventa y seis mil, noventa y siete mil personas, que son las que estarían en la posibilidad de ejercer ese derecho, y ha sido esta Sala, en los diferentes precedentes, pero también la Sala Superior, quien (como ya lo decía yo en mis palabras) vinculó al Instituto Nacional Electoral a que se hicieran las pruebas piloto.

Ha habido, hasta este momento, dos pruebas piloto: la del dos mil veintiuno y una en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, donde, de eso, se han presentado ejercicios ya con datos muy duros para ver qué funciona y cómo funciona o cómo puede operarse o materializarse o concretarse ese derecho.

Con relación a la segunda pregunta que me hace, Ministro, que tiene que ver con que si las personas, el voto pasivo (digamos) si las personas que están en reclusión pudieran ser o no candidatos, hay ya un asunto, un precedente de la Sala donde se dijo... a un cargo de diputado, donde se dijo que podía participar; sin embargo, eso tiene una (digamos) una dimensión distinta y las razones:

¿cómo van a poder esas personas privadas de la libertad hacer campaña? Eso genera otras limitantes y no solo visto desde el derecho de esa persona, como voto pasivo, sino también el derecho a la ciudadanía a que, una vez que resultara electo, ¿cómo va a poder ejercer el cargo si está privado de la libertad? Porque aquí hay dos aspectos: por un lado, su derecho, que yo creo que hay que maximizarlo y luego, ir resolviendo todas y cada una de estas aristas, pero también tiene que ver el voto de la ciudadanía, es decir, si él resultara electo, la representación que él recibió de la ciudadanía ¿cómo va a poder ejercerse? Entonces, yo lo que considero es, y siempre defensora de los derechos humanos, hay que potenciarlos, hay que maximizarlos, y luego, en el día a día, ser creativos para poder atender cada una de las problemáticas que se puedan dar durante el transcurso de los mismos. De los ejercicios, por ejemplo, que se han hecho, se ha visto que la forma en como adquieren la información desde el reclusorio puede ser no la idónea y, entonces, eso podría afectar el voto informado, por eso digo que es importante maximizar el derecho, ir en cada uno de los contextos, en cada uno de los casos en particular ir resolviendo todas y cada una de estas otras problemáticas que están en torno o alrededor de este derecho. Muchísimas gracias por sus preguntas.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

SEÑORA LICENCIADA MARTÍNEZ VALERO: Gracias, permiso.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer a la aspirante número 7, Mosri Gutiérrez Magda Zulema.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante, por favor.

SEÑORA LICENCIADA MOSRI GUTIÉRREZ: Respetables Ministras y Ministros: me complace compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las resoluciones analizadas, la primera dictada por el Pleno de esta Suprema Corte, que sienta las bases para materializar la paridad de género en todos los órganos de elección popular, incluidos los de carácter uninominal.

Se determinó que existe mandato constitucional y convencional para que las mujeres sean elegibles en condiciones de igualdad y no discriminación, lo que implica tomar medidas para reducir las desigualdades y lograr la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos del servicio público, incluido la toma de decisiones.

En virtud de la paridad, más mujeres participan de los cargos públicos y, en consecuencia, más actos de violencia política se cometen; por ello, la importancia de la resolución del Tribunal Electoral, en la que se acreditó mediante pruebas indirectas e indicios que un presidente municipal cometió violencia política por razón de género en contra de una regidora al invisibilizarla, restringirle e impedirle el ejercicio de las funciones para las que fue electa.

El análisis del contexto en que suele darse la violencia política, es decir, sin testigos, de manera oculta y basada en la descalificación del dicho de la víctima, aunado al reconocimiento de la desigualdad entre las partes fue lo que generó que la Sala Superior determinara

que las pruebas aportadas por la víctima gozan de presunción de legalidad y de veracidad de la conducta denunciada.

Además, el análisis de perspectiva de género que se presentó fue lo que dio especial preponderancia al análisis y al dicho de la víctima, sin que con ello se violara el principio de presunción de inocencia, dado que la valoración de las pruebas que se hizo fue consistente con el estándar reforzado.

Si bien, en el caso, se advirtió una situación de desventaja en razón del género de la víctima y considerando que la violencia política, por ser de carácter simbólico, no responde a un paradigma o patrón común que pueda fácilmente evidenciarse o hacerse posible, fue que se determinó revertir la carga de la prueba para que fuera el agresor el que desvirtuara las aportadas por la víctima; esto con base al deber de debida diligencia que la Corte Interamericana ha determinado en los casos en los que se investiguen violaciones a los derechos humanos.

Otro aspecto importante fue que se reconoció la constitucionalidad del registro nacional de personas sancionadas, que obedeció al deber del Estado de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De hecho, las listas cumplen una función social y también una garantía de no repetición y medidas de reparación integral que tienen un propósito correctivo y restitutivo.

Si bien los retos, los desafíos que tenemos al analizar estos asuntos consisten en no poner en riesgo el ejercicio de otros derechos fundamentales, como sería el de la libertad de expresión, máximo

en estos tiempos, en los que el avance tecnológico permite nuevas formas de publicación de ideas.

Los retos de la Sala Superior son muchos, no solamente calificar la elección presidencial o el mayor número de cargos que están en disputa, sino en reconocer las nuevas dinámicas sociales, tecnológicas y de participación amplia que estamos viviendo, que hace necesario conducir el proceso electoral dentro de los límites de la constitucionalidad, pero partiendo de la base de la libertad de expresión que, como lo ha reconocido esta Suprema Corte y la Corte Interamericana, es la piedra angular de cualquier democracia.

Debemos priorizar un debate amplio, sólido, profundo sin dejar de reconocer que, en la actualidad, existen muchas formas y grandes capacidades de publicación de ideas, inclusive, con una enorme resonancia en las redes sociales en Internet; por ello, ante este Máximo Tribunal me comprometo a honrar, como única guía de actuación, el respeto a la Constitución y a los derechos humanos y a conducir el proceso electoral más grande de la historia de México mediante sentencias que generen certeza, garanticen la equidad de la contienda y fortalezcan la democracia.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministra Ríos Farjat.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Gracias, Ministra Presidenta. Me parece que la mujer sigue enfrentándose a obstáculos, retos, inequidades, desigualdades y sin duda, a violencia. Usted toca el tema de la violencia de género en su ensayo. Una de las aristas de la violencia política, en términos judiciales, es justamente cómo probarla. Usted menciona que la reversión de la carga probatoria es

una manera de lograr demostrar esa conducta, que además hay que tener cuidado con otros derechos fundamentales, y menciona también las nuevas tecnologías.

Me gustaría que ahondara un poco más en el tema de la carga probatoria y de la debida ponderación probatoria para demostrar la existencia de esta violencia. Por la otra parte, creo que no nada más nos enfrentamos las mujeres (o se enfrentan las mujeres políticas) a la violencia, sino a la invisibilización política y electoral, y en ese sentido, quizá uno de los diseños normativos que se han implementado en épocas recientes, es justamente el de bloques de competitividad electoral que permitan la participación efectiva de las mujeres.

Pero esta es mi reflexión. Me gustaría oír su opinión: si ya con eso es suficiente, o si también puede transmitirse una falta de neutralidad de la norma a través del diseño de esos bloques de paridad. Es decir, que los bloques de paridad fueran diseñados de una manera tan técnica, tan elevada, tan compleja, que no nada más alejaran a la sociedad del entendimiento de la norma electoral, sino que no quede clara la neutralidad en las normas, de manera que desde ahí mismo (en normas ideadas para el progreso político de las mujeres) venga la simiente o la semilla para su propio freno.

Entonces, por una parte son los retos de las pruebas y la ponderación probatoria para desentrañar la violencia de género; y por la otra es ¿qué se puede hacer para la debida efectividad de los bloques de paridad como mecanismo para evitar la invisibilización de las mujeres en la vida pública de México? Gracias, Magistrada.

SEÑORA LICENCIADA MOSRI GUTIÉRREZ: Gracias a usted, señora Ministra. Bueno, respecto a las pruebas, precisamente por tratarse de la violencia política por razón de género, que generalmente se da de carácter simbólica, es decir, es aquella que es (digamos) indirecta: no es tan fácil de probarse porque corresponde (digamos) o se da dentro de ciertas estructuras basadas en los estereotipos de género.

En el caso de las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, han sido mediante un análisis integral, mediante pruebas circunstanciadas, es decir, que se evalúan diferentes indicios del dicho de la víctima que, de manera conjunta, determinan una prueba circunstancial de valor y, en virtud de que se identifica mediante la aplicación de la perspectiva de género, como categoría de análisis en la resolución de estos asuntos, que debe ser necesario cuando se acredite que, efectivamente, hay violencia política por razón de género, porque puede ser por otras razones, se tiene que revertir la carga de la prueba a quien esté en mejores condiciones de probar, y esto implica que se identifique, precisamente, esa situación asimétrica de poder o contextos de desigualdad estructural en los que se encuentran las personas por razón del género y por razón de la posición o estructura que ocupan en esa (digamos) relación, ya sea laboral o en una contienda.

En el caso concreto de la violencia política, por ser (como dije) simbólica, sí es necesario atender a esos hechos (digamos) que, si bien es cierto se dan de manera aislada, se tienen que analizar concatenadamente, tiene que haber una correspondencia entre ellos y, para que en base a la vía de la inferencia se determine con un conjunto de pruebas o de indicios como sucedió en el caso

concreto, la posible comisión de esta conducta que se considera violencia política por razón de género.

Respecto al otro tema, efectivamente, considero que las sentencias, además de cumplir con un papel fundamental, que es contribuir al aprendizaje institucional, me refiero de las autoridades en señalarles, darle los elementos de cómo sujetar la actuación con base en la norma o en ciertos parámetros, también las sentencias cumplen esa función de contribuir a la sociedad para, digamos, socializar o decirles en qué caso sí se incurre, en el caso concreto, en violencia política por razón de género y en qué casos no.

Por eso, es muy importante esta labor que realizan los órganos jurisdiccionales al momento de emitir sentencias, máxime en estos tiempos, en los que (señalaba hace un momento) es importante no poner en riesgo que el ejercicio de otros derechos fundamentales que, inclusive, también podrían ser derechos político-electorales, por lo que una manera (digamos) de socializar o de contribuir con la sociedad en este efecto democratizador de las sentencias es, precisamente, delimitando claramente los elementos fundamentales de este tipo de conductas para que, de esta manera, pues se desincentiven la (digamos) realización de ciertas conductas que puedan incurrir en violencia política.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: ¿Y sobre bloques de competitividad electoral?

SEÑORA LICENCIADA MOSRI GUTIÉRREZ: De bloques de...

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: De competitividad electoral para la participación de las mujeres.

SEÑORA LICENCIADA MOSRI GUTIÉRREZ: Yo considero...

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: ¿Tiene alguna reflexión?

SEÑORA LICENCIADA MOSRI GUTIÉRREZ: De los bloques de competitividad electoral, creo que ya se ha dado cuenta de una serie de criterios, en los que se ha construido paulatinamente mecanismos y condiciones para que las mujeres participen en condiciones de igualdad y no discriminación en las contiendas electorales; sin embargo, me parece que, por la situación (digamos) de desigualdad estructural en la que históricamente se han presentado las mujeres, si bien es cierto se ha avanzado, me parece que no es suficiente para (digamos) señalar que están en condiciones no solamente de igualdad o de equidad en la contienda, sino de seguridad para participar en esto. Por ello, creo que uno de los desafíos está, precisamente, en seguir dando condiciones no únicamente mediante las sentencias, que estas contribuyen, si bien es cierto a (digamos) que se legisle de modo que haya un marco de protección a las mujeres, sino también en que se generen condiciones en la política pública para que las mujeres, colocándolas en un plano (digamos) de igualdad puedan estar en condiciones de poder contender en estos asuntos.

SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Muchas gracias, Magistrada. Gracias, Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias a usted.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 8, Sandoval López Francisco Javier.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Buenas tardes. Adelante, por favor.

SEÑOR LICENCIADO SANDOVAL LÓPEZ: Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguidas Ministras, señores Ministros: agradezco la invitación para comparecer ante este Alto Tribunal. El primer punto de mi ensayo versó sobre la propaganda gubernamental y elegibilidad a cargos de elección popular. No hay duda de que la expresión “modo honesto de vivir” abre la puerta para interpretaciones que pudieran traducirse en formas de discriminación, como lo ha sostenido consistente y reiteradamente este Alto Tribunal.

En ese sentido, era poco sostenible que una construcción tan considerablemente abstracta e inestable, como esa, pudiera servir de base para sancionar incumplimientos en materia de propaganda gubernamental, bajo la premisa de que la ley en la práctica no cumple con las medidas que persigue. En la SUP-REP-362/2022, la Sala Superior trató de reconfigurar el cuadro de sanciones, añadiendo por vía de la interpretación la posibilidad de suspender los derechos políticos de los involucrados bajo la implícita inferencia de que, quien se conduce con desacato grave, pierde la calidad de modo honesto de vivir.

El problema es que el derecho administrativo sancionador ha importado del derecho penal los principios de taxatividad y reserva de ley, de manera que, si la sanción no está expresamente prevista

en la ley ni en la Constitución, no puede aplicarse por vía de interpretación ni por analogía o mayoría de razón. Más allá, incluso, de cualquier conjetura teórica o doctrinal, los artículos 134 y tercero transitorio de la reforma de dos mil catorce a la Constitución encomendaron al Congreso de la Unión expedir las leyes que reglamentaran que el régimen de obligaciones y sanciones por incumplimiento en materia de propaganda gubernamental, y si esta legislación, como lo advierte la Sala Superior, no cumple con su misión de prevenir los ataques al Supremo Ordenamiento, la solución no es ignorar esa reserva de ley y atribuirse facultades para reconfigurar y agravar el régimen disciplinario, porque eso es tanto como combatir un desacato a la Constitución con otro desacato a la Constitución.

La conclusión de la Sala Superior puede ser intuitiva, pero deviene en un argumento *de lege ferenda* y, como tal, tiene que ser atendido por el Congreso de la Unión.

Tema 2: sobrerrepresentación. En el plano sociológico, el poder se mide por la capacidad de imposición que tienen los intereses organizados. A lo largo de la línea vertical y ascendente que pasa por la competencia entre los partidos políticos y las elecciones generales, se transforma en poder político dividido entre gobierno y oposición. Este poder político, en el marco de las competencias constitucionales se emplea para convertirlo en decisiones vinculantes a través del proceso de producción legislativa y del aparato administrativo.

El Congreso de la Unión, por consiguiente, es una procesadora de todas las aspiraciones sociales del espectro político. El Congreso,

entonces, procesa todas las ofertas políticas que tengan la capacidad de organizarse y define qué rumbo tomar. Cuando los votos que están detrás de todas estas ofertas políticas encuentran voz y representación al interior del Congreso, se produce un equilibrio que favorece soluciones de consenso, de modo que no siempre prevalezcan los intereses de unos sobre otros, ni de los mismos ni de los de siempre.

Este círculo virtuoso ayuda a reducir la confrontación social y acerca el sistema al pluralismo moderado. La sobrerrepresentación, sin embargo, es un fenómeno que distorsiona ese equilibrio plural, saludable y deseable al interior del Congreso porque, al otorgarse escaños por encima de los porcentajes reales de la votación obtenida en la elección respectiva, se introduce desconfianza e inestabilidad en el estado democrático constitucional al negar voz y representación a los intereses de miles o decenas de miles de votantes, que conforman esas minorías organizadas, pero ignoradas por la subrepresentación.

En ese sentido, consideramos que fue un acierto de la Sala Superior haber confirmado el acuerdo INE-CG-193/2021, que sentó las bases para identificar la afiliación efectiva. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministra Esquivel, por favor.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Gracias, Ministra Presidenta. Muchas felicidades, Magistrado Francisco Javier Sandoval, por su ensayo. Aborda un tema que nos parece muy

importante en la contradicción de criterios 228/2022, entre los sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 107/2016 y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el procedimiento especial sancionador 362/2022. Esencialmente, se determinó que no se puede exigir a las personas cumplir con el requisito de tener un modo honesto de vivir a fin de acceder a un cargo público ni sancionarlas por carecer de él, al ser una exigencia subjetiva que supone una expresión ambigua y de difícil apreciación.

Ahora bien, en el recurso mencionado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de la impugnación realizada por personas servidoras públicas, cuya pretensión fue que no se les declarara responsables por infringir en la normativa electoral por diversas publicaciones que habían realizado.

En la sentencia, la Sala Superior determinó confirmar esa responsabilidad y, además, emitió lineamientos para que todas las autoridades jurisdiccionales electorales, federales y locales, acreditaran la existencia de infracciones constitucionales por parte de personas servidoras públicas y que se pudiese actualizar la suspensión de la presunción de un modo honesto de vivir como requisito de legibilidad.

Me gustaría escuchar su opinión con relación a dos temas específicos con relación a la creación de lineamientos generales e infracciones por una Sala, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de la solución de un caso concreto.

Y la segunda: ¿cuál considera que deberían ser los alcances del principio *non reformatio in peius* en los efectos que deben tener las sentencias en la jurisdicción electoral? Esos serían mis dos cuestionamientos. Gracias por su respuesta, magistrado. Gracias.

SEÑOR LICENCIADO SANDOVAL LÓPEZ: Sí, muchas gracias, Ministra. Bien. La materia electoral, en realidad, es una materia que se ha ido creando a partir de la ley, pero también con el cincel de la jurisprudencia. El procedimiento especial sancionador, por ejemplo, es un ejemplo de cómo determinadas figuras, que no existían en la ley, fueron primero pensadas por la jurisprudencia, después bajadas a unos lineamientos para que los desarrollara el Instituto Nacional Electoral y, posteriormente, reconocidos por la ley, y hoy una herramienta imprescindible para la solución de controversias electorales.

El problema es que, en este caso, la Sala Superior trató de crear una sanción distinta de la que estaba en la... en la LGIPE o en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En algunas de sus consideraciones se percibe la... cierto desencanto por el hecho de que solo se permitiera dar vista al superior para que en... fuera el superior el que abriera los procedimientos administrativos de responsabilidad y procediera en consecuencia, y entonces se encuentra que, frente a esto, pues hay un marco constitucional que se apoya en el modo honesto de vivir como condición para mantener la calidad de ciudadano y encuentra que, bueno, pues solo los ciudadanos pueden tener derechos electorales tanto para promoverse como para participar en los procesos electorales y, entonces, decide que se vincule a todas las autoridades del país para que estas recaben información y

aperciban a las autoridades que incurran en desacatos graves por propaganda gubernamental y, en un momento dado, (no lo dice expresamente, pero) se puede inferir que esa es la conclusión implícita de esta sentencia: el que las autoridades puedan ser suspendidas en sus derechos políticos y, concretamente, en la situación de elegibilidad a los cargos de elección popular.

El problema de esto es que ese proceso especial sancionador, como todos los procedimientos administrativos sancionadores, incorporó del derecho penal los principios de taxatividad y de reserva de ley, de manera que, las sanciones tienen que estar previstas expresamente en la ley o en la jurisprudencia; no pueden ser producto de la (dijéramos) decisión unilateral de las autoridades judiciales. Entonces, creo que eso fue un poco el tema y, afortunadamente, fue corregido por esta Suprema Corte al resolver esta contradicción de criterios.

Por el otro lado, pues, efectivamente, también se estaba agravando la situación de los recurrentes en la medida de que se utilizó la instancia para agravar su situación, y esto está prohibido por los principios generales de derecho porque criminalizan la instancia y, al criminalizar la instancia o al volver punitiva la instancia, invitan a que la gente no recurra a los medios de defensa, que tienen por miedo a que la conclusión pueda ser peor de la situación en la que estaban. No sé, Ministra, si con esto haya dado respuesta.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Muchas gracias, magistrado. Gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 9, Silva Adaya Juan Carlos.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Buenas tardes. Adelante, por favor.

SEÑOR LICENCIADO SILVA ADAYA: Distinguidas señoras Ministras y señores Ministros. En la culminación de una trayectoria de más de treinta años en la judicatura electoral nacional, representa un honor comparecer ante este Pleno junto con once importantes perfiles. Sé de la seriedad del reto que representa un complejo escenario que viene precedido de dos mil setecientos sesenta y tres asuntos en los procesos electorales en dos mil cinco, mil ciento seis en dos mil seis, sesenta y cuatro mil doscientos nueve asuntos en dos mil doce y veintisiete mil setecientos veintiuno para dos mil dieciocho, cerrando con una cifra que asciende a un estimado de más de dieciocho mil seiscientos para el proceso electoral actual, en el que se van a elegir una Presidencia de la República, ciento veintiocho senadurías, quinientas diputaciones federales, ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno, así como mil noventa y ocho diputaciones locales y dieciocho mil cuatrocientos veinticinco cargos en los ayuntamientos y alcaldías, con siete partidos políticos nacionales y ochenta y tres locales.

A partir de la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la cual se modifica el proceso de designación de los tribunales electorales locales y su validación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, se hizo patente el carácter fundamental de la independencia judicial,

como una condición para la adecuada prestación del derecho humano de acceso a la justicia. El cuestionamiento bajo el argumento contramayoritario de la función judicial no es nuevo ni propio de un régimen autocrático. Efectivamente, tiene una profunda raigambre histórica, como lo advirtieron Hamilton, Madison y Jay, 1788, John Marshall, 1803, y Alexis de Tocqueville, 1835, y cristalizó con la prevalencia del control jurisdiccional de la ley en el llamado modelo americano o el austriaco kelseniano frente al modelo político en el diseño de Carl Schmitt. Esto último se encuentra más acusado en la materia electoral porque tiene dos vertientes que implica cuestiones políticas de primer orden: la decisión sobre la regularidad de los procesos democráticos representativos y participativos, por un lado, y el control concreto y difuso de la constitucionalidad de la ley electoral, por el otro. El revestimiento de condiciones jurídicas personales y materiales en el caso de la independencia judicial lleva a afirmar que no están dirigidas a situar a la jueza o el juez en una posición de privilegio.

En los casos decididos por la Sala Superior en los expedientes JDC-255 y RAP-159, ambos de 2023, relativos a la emisión de los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con la construcción del Frente Amplio por México y la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, respectivamente, se concluyó que la ley debe interpretarse y aplicarse motivada en el contexto. Desde mi perspectiva, en dichos precedentes se acude a un sentido crítico del derecho, de conformidad con los valores actuales sin anclar a las generaciones presentes y futuras en la doctrina de los padres fundadores, como una suerte de sociedad estática-inmóvil en un derecho sin

capacidad de adaptación y confiado a jueces originalistas y textualistas de razonamientos apodícticos. La Constitución Federal también debe entenderse como un texto vivo y eficaz que tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades; no es una cláusula pétrea o una norma jurídica intangible. Efectivamente, en el Tribunal Electoral, con vocación transformadora, han cobrado carta de naturalización las sentencias aditivas de interpretación extensiva para que se abran los significados de dichas normas jurídicas en los aspectos instrumentales, siempre que se atienda a su finalidad de garantizar la equidad en la contienda electoral, como normas de textura abierta para hacer ajustes razonables que permitan a los partidos ejercer su derecho de autodeterminación. Cuando el Tribunal Electoral atiende al contexto de los preparativos de los procesos internos de los partidos, se establece un diálogo dentro del marco de lo razonable en una suerte de democracia deliberativa.

La función judicial encuentra su misión constitucional en la necesidad de dar vigencia al sistema de pesos y contrapesos y al régimen de autonomías constitucionales para proscribir la distrofia del Estado constitucional y democrático de derecho, cualquiera que sea su origen. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministro Aguilar Morales.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señora Ministra. En principio, me parece muy interesante, inclusive, la afirmación con la que usted inicia... no inicia, pero que contiene en su estudio, en su planteamiento: de que está convencido de que la independencia judicial es una condición para que la judicatura, a través de sus sentencias aditivas, realice no solo una aplicación

compensatoria del derecho, sino que, sobre todo, representa al último valladar constitucional. Esta es una opinión interesante, pero, me parece que mejor le señalaré lo que usted señala en su postura sobre el derecho administrativo sancionador, en el que no está de acuerdo en que, por tratarse de un derecho administrativo sancionador, el principio de tipicidad no tiene las mismas exigencias que las previstas en materia penal porque, según la Sala Superior (dice usted), lo que ahora se identifica como el principio de *nullum crimen, nulla poena sine lege penali, praevia, stricta et scripta*, no tiene la misma rigidez en el derecho administrativo sancionador, sino que está modulado. Parece ser que eso es lo que señala usted que dice la Sala Superior, porque para la Sala Superior ello permite que existan normas de remisión de un tipo básico al resto del ordenamiento legal e, incluso, administrativas.

Entiendo que esto para usted podría validar un tipo penal en blanco (así lo señala usted en su estudio). ¿Qué puede abundarnos sobre este tema del tipo penal en blanco?

SEÑOR LICENCIADO SILVA ADAYA: Sí, efectivamente, desde mi perspectiva esto resulta de primordial importancia porque el hecho de que existan tipos penales en el ámbito penal, como tipos penales en el ámbito administrativo sancionatorio, no quiere decir que se flexibilice la exigencia en cuanto al respeto de los principios: tipicidad, mínima intervención, protección del bien jurídico, entre otros aspectos porque, finalmente, en cualquiera de los dos escenarios esto consiste en la limitación o restricciones al ejercicio de los derechos, derivado de la realización de conductas ilícitas y, bueno, ¿cuál es la característica fundamental del establecimiento de los tipos? Que los sujetos puedan conducir sus actividades bajo

condiciones de certidumbre, es decir, cuáles son las conductas prohibidas a partir del texto legal.

Entonces, ¿qué encontramos muchas veces en la materia electoral? Se encuentran tipos como los siguientes: se puede sancionar a determinado sujeto por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que están previstas en la presente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y, entonces, ¿qué debe tipificarse? Las conductas graves, sobre todo, por lo siguiente: muchas veces, estas conductas pueden implicar la pérdida del registro de un partido político (por ejemplo) y, entonces (claro), tiene que ser en un escenario muy grave y tenemos muy claro que en el artículo 22 de la Constitución está prohibida la pena de muerte, pero esto equivale prácticamente a una muerte civil para el partido político y, entonces, si pensamos que esta ley (por ejemplo) tiene más de cuatrocientos artículos, bueno, ¿a cuál de estas conductas se está refiriendo? El principio de necesidad, el principio de mínima intervención implicaría que serían solamente aquellas que resulten más graves y, a juzgar, luego, por el tipo de sanciones que se puede imponer, pues esto es una cuestión muy delicada porque, finalmente, (por ejemplo) cuando existen tipos, cuando se dice: el incumplimiento de los acuerdos del Consejo General, bueno, habría que ver a cuáles de esos acuerdos se está refiriendo para que se pueda llegar a actualizar este tipo de conducta, y esta situación es muy compleja. Ya hace un momento se refería, por ejemplo, a la cuestión del tipo de la violencia política de género.

Entonces, las consecuencias que se están actualizando a partir de determinaciones judiciales y esto no solamente tendría que ver únicamente con el nivel de abstracción, sino también con esta

posibilidad de prever cuáles son esas conductas debidas o las conductas prohibidas, y esto me parece que debería de ser solamente materia del legislador, es decir, a través de una ley formal y materialmente entendida, así deriva también de los compromisos que adquirió México en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, las restricciones a los derechos únicamente tienen que estar previstas, son las que están autorizadas en la Constitución, deben ser restricciones debidas o el de los tratados internacionales. Es cuanto, muchas gracias, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Muy bien, muchas gracias. Gracias, señora Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Muchas gracias.

SEÑOR LICENCIADO SILVA ADAYA: Muchas gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer al aspirante número 10, Sumuano Cancino Enrique.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Adelante, buenas tardes.

SEÑOR LICENCIADO SUMUANO CANCINO: Buenas tardes, señora Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, señoras Ministras, señores Ministros. Con su venia. El ensayo que sometí a su consideración toca dos temas que son torales para el desarrollo de la vida democrática de este país. En el primero, SUB-REP-116/2020, la Sala Superior, a la luz de la reforma constitucional de

seis de junio de dos mil diecinueve, consolidó en su fallo el principio de paridad entre mujeres y hombres ante la ley y, así, dio cabal cumplimiento al mandato constitucional de paridad en todo. Este principio debe ser uno de los ejes rectores del operador jurídico en materia electoral para poder hacer vigente la participación política de las mujeres en puestos de trascendencia y relevancia. Con esta guía de interpretación en el asunto en cita, la Sala Superior, por un lado, determinó invalidar el acuerdo administrativo del INE sujeto a revisión por haber excedido los límites del principio de reserva de ley al invadir la esfera de los Congresos federal y local; pero, además, a fin de generar las condiciones necesarias para que las mujeres tuvieran la oportunidad de competir en los máximos cargos de dirección político a nivel estatal, vinculó, entre otros, a los partidos políticos para que, en los procesos electorales del año dos mil veintiuno, registraran candidatas en, cuando menos, siete de las quince entidades en donde se renovarían las gubernaturas.

Lo anterior, tuvo como efecto, en ese año, que seis mujeres llegaran a ocupar el cargo de gobernadoras en sus entidades federativas. Considero que esta debe ser la labor interpretativa de los tribunales constitucionales, pues la ausencia de reglas claras no debe ser impedimento para no garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, que debe irradiar en todos los ámbitos de lo público, incluso, en lo privado. Este razonamiento no es novedoso para este Alto Tribunal, entre otros, en similares condiciones esto se dio a propósito de la figura del amparo adhesivo, cuando la tal figura estaba prevista en la Constitución y no así en la Ley de Amparo, y ello no fue obstáculo para la procedencia del medio de control constitucional.

El segundo criterio motivo de mi ensayo fue la acción de inconstitucionalidad 50/2014, en la cual, entre otros temas, se determinó, en su alcance, el privilegiar la protección del sufragio universal, libre, secreto y directo, garantizando con ello las elecciones libres, periódicas y auténticas al señalarse que, aún en el ejercicio de la libertad de culto, se prohíbe a sus ministros presionar al sentido del voto, inducir al electorado a votar, a abstenerse de votar en favor o en contra de determinado candidato o candidata, partido político o coalición política. La base democrática de una elección descansa en que el voto ciudadano se emita, entre otras condiciones, en absoluta y plena libertad sin coacción alguna. En esa condición, cualquier norma ordinaria que contemple ello bajo la óptica de que ningún derecho fundamental es absoluto y admite limitaciones es constitucionalmente válida. Esta medida restrictiva es necesaria, dada la importancia y trascendencia que los ministros de culto religioso guardan en su comunidad. Conlleva una finalidad legítima: la de preservar elecciones en las que se garanticen los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo. Es razonable, pues se encuentra orientada a garantizar el sistema representativo, democrático y laico federal. Y, además, es proporcional en el sentido estricto con el fin perseguido, pues si bien exige una conducta de abstención, lo cierto es que, con ello, se brinda que las elecciones en México sean libres, periódicas y auténticas.

Por último, señoras y señores Ministros, no quiero dejar pasar la ocasión para expresarles que mi aspiración ante ustedes descansa en el hecho de que, en casi treinta y cuatro años de servicio, el Poder Judicial de la Federación ha sido y es mi vida. Desde la Octava Época lo he vivido, he visto su transformación y

consolidación a través de este Tribunal Constitucional y del surgimiento del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral. He transitado responsablemente en cada una de estas instituciones. He sido y soy parte de ellas.

Soy un funcionario público hecho íntegramente en el Poder Judicial de la Federación, de ahí que mi único compromiso lo es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias. Ministro Pardo, por favor.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias, Ministra Presidenta. Mi reconocimiento a todas y todos los participantes en este proceso. Me parece que, en su totalidad, acreditan experiencia, trayectoria, profesionalismo, y eso me parece que es una garantía para la decisión que vaya a tomar este Máximo Tribunal con la conformación de las ternas, en este caso.

Don Enrique Sumuano Cancino, me llamó la atención (porque fuimos parte del debate) el segundo de los temas que expuso en su ensayo, que es el relacionado con la acción de inconstitucionalidad 50/2014.

Como usted bien dice, en esa acción la determinación que se tomó por parte del Tribunal fue que la reforma al artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales no resultaba violatoria del artículo 24 constitucional respecto del tema de libertad de culto.

Yo le quisiera preguntar su opinión en relación con el ejercicio de ponderación de derechos que se hizo en este asunto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si es tan amable.

SEÑOR LICENCIADO SUMUANO CANCINO: Muchas gracias. Efectivamente, señor Ministro, este tema, como lo señalé en mi exposición, para mí es de relevante importancia, dado que, en sí mismo, pudiera constituir y lo constituye, de alguna manera, una restricción a la libertad de expresión; sin embargo, en relación al artículo en concreto, se valoró la posición que guardó el artículo en su reforma en relación a la importancia que tienen los ministros también de culto en las respectivas comunidades en donde radican, y que ello también pudiera, de alguna manera, influir en la emisión de un voto libre, en el caso específico del artículo 16, y también, sin dejar de reconocer que existen otros artículos concatenados, si bien existen limitaciones, estas también deben de ponderarse a la luz de otros derechos, otros principios que se encuentran contenidos en la Constitución.

En este caso, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 130, que también, de esta manera, especifican que la norma, en su taxatividad, se encontraba específicamente clara y era determinante en establecer a quién estaba destinada la norma, el objeto de la norma, la finalidad de la norma y el fin que justificaba esa medida de restricción, de ahí que se estimó que, cumpliendo todos estos requisitos, en base a ese test de proporcionalidad también, en el preciso momento de esta reforma no vulneraba, de alguna manera; era válida la restricción y cumplía con el principio de taxatividad, que exige el derecho penal para poder emitir este acto legislativo.

Es importante mencionar que aquí estamos en presencia de un delito, de un delito establecido en la Ley General sobre Delitos Electorales y no haciendo una infracción administrativa, que estaría dispuesta, por ejemplo, en la LGIPE. Entonces, su trato era de manera más directa en su acuciosidad y en el rigor del test que se tenía que sostener para poder estimar que esta restricción también era válida a la luz de nuestro marco constitucional. Esa sería mi respuesta.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: ¿Me permite? Aprovechando que queda un poco de tiempo y precisamente en relación con esta última afirmación que hace usted, ¿qué opinión tiene de que esta conducta haya sido incluida, precisamente, en la Ley General de Delitos en Materia Electoral respecto del principio de *ultima ratio*, que debe imperar en el derecho penal? ¿Cuál sería su opinión?

SEÑOR LICENCIADO SUMUANO CANCINO: En relación con ello, pienso yo que el análisis que se debe de dar de esta norma, también en su conjunto, debe de observar también los demás principios que imperan en la Constitución, y esto por determinar, de alguna manera, se encontraría contemplado también en la razón que obtienen los artículos 40 constitucional y 41 en el sentido de que debe de existir, en esta condición, una república representativa y laica en ese sentido, de ahí que, si esto lo hermanamos o lo concatenamos con el correspondiente a que el sufragio debe de ser libre en ese sentido, encuentra una razón sustentada, para mí, específicamente y concretamente en esos artículos 40 y 41 de la

Constitución para poder encontrar hermenéutica en la Constitución política y encontrarle una razón válida a esa restricción o limitación.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Muchas gracias. Gracias, Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Al contrario, gracias. Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer a la aspirante número 11, Valle Aguilasocho Claudia.

SEÑORA LICENCIADA VALLE AGUILASOCHO: Muy buenas tardes, señora Ministra Presidenta, señoras Ministras, señores Ministros. Es un honor comparecer ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este proceso de selección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En el ensayo que está a su consideración, analicé la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas, a partir de la cual se genera un nuevo modelo de elección consecutiva, que da lugar la reforma político-electoral de dos mil catorce.

En la referida acción, el partido político promovente lo que plantea es una limitación al derecho a ser votado desde las previsiones de dos artículos del Código Electoral del Estado de Coahuila, de frente a las bases consagradas en los artículos 115 y 116 del Pacto Federal, por estimar que daba un trato diferenciado a las candidaturas partidistas y a las candidaturas ciudadanas. De frente a las candidaturas partidistas, se expuso se daban dos posibilidades de postulación: la postulación por el mismo partido de origen, o bien, por cualquiera de los partidos que integraba la

coalición; en tanto que a las candidaturas ciudadanas se les concedía solo una posibilidad: optar por la reelección solamente conservando esta modalidad o esta calidad.

Este Pleno descartó que existiera una diferenciación injustificada al identificar que se trata de calidades jurídicas distintas, que las candidaturas partidistas no comparten la misma naturaleza de las candidaturas ciudadanas. También, en relación a la regla de postulación única que se reconoció, está dirigida únicamente a las candidaturas ciudadanas. Se consideró que esta regla debía validarse a partir de la génesis que se extrae de la razón misma, a partir de la cual en dos mil doce el Poder Reformador de la Constitución consideró crear las candidaturas ciudadanas como una posibilidad o una vertiente distinta y separada o desvinculada de los propios partidos políticos.

En esta ejecutoria seleccionada para comparecer ante ustedes y poner en la mesa el tema de la reelección por la importancia que tienen los procesos por venir, también se identifican cuáles son sus bases, la primera de ellas es la posibilidad de consecución en el cargo por un límite básico de períodos; la segunda de las reglas se trata, precisamente, del deber de conservar el origen de postulación; la tercera, que se trata de una habilitación a una postulación abierta; considera la viabilidad de postulación por una fuerza distinta, con una condicionante: la renuncia o la separación de la militancia, en el caso, al menos a la mitad del período del mandato.

Considerando lo anterior y de frente a los procesos electorales históricos más grandes que han de celebrarse en nuestro país, considero que, por primer ocasión, el hecho de que las senadurías

puedan ser reelectas y que los distintos cargos repitan esta posibilidad, como juzgadores, como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral habremos de realizar una labor interpretativa integradora necesaria para dar viabilidad a la reelección ante supuestos que la norma general no prevé.

Entre otros, la participación de candidaturas externas o candidaturas sin militancia y la condición particular que se presenta ante los grupos parlamentarios sin siglas partidistas, hoy conocidos como grupos plurales.

En las etapas de campañas, esto es, una vez iniciada la contienda y definidas las y los competidores, también tendremos otros retos. Estos retos los identifico a partir de vigilar el cumplimiento de los principios constitucionales de equidad, de legalidad y de neutralidad, pues también, en esta oportunidad, estaremos frente a dos tipos de candidaturas: las candidaturas en reelección y las candidaturas que por primera vez participan. En estos y en estos escenarios, materia de litis, de juicios y de recursos que habrán de llegar a la Sala Superior, la interpretación auténtica de la reelección y la dimensión que se ha dado de sus fines democráticos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán ser la hoja de ruta de la que partamos.

Las judicaturas electorales en el mundo y en México requieren árbitros capaces, árbitros comprometidos, árbitros íntegros y con vocación de servicio. Señoras Ministras y señores Ministros: con humildad, ante ustedes y ante la ciudadanía, asumo el compromiso de cumplir y de hacer cumplir la Constitución, pues solo a partir de

garantizar el pacto federal podremos honrar la función a la que aspiramos. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias, Presidenta. Magistrada, en su ensayo toca dos temas muy importantes. El primero de ellos ya lo ha expuesto con amplitud, me interesa ocuparme del segundo de ellos.

Más allá del análisis que hace usted de la sentencia de la Sala Superior, quiero saber su opinión, no el análisis de la sentencia, sino lo que usted opina. ¿Cómo ve este problema, en caso de que usted llegue a integrar, precisamente, esta Sala Superior, y que me parece un tema de la mayor trascendencia en este momento en nuestro país, porque tenemos un sistema electoral que, en ciertos aspectos, afecta seriamente la libertad de expresión?

Y el segundo tema: usted trata la libertad de expresión en las redes sociales, cuando ciudadanos o ciudadanas o cuentas, incluso, de origen desconocido hacen una aparente propaganda o manifestaciones en cualquier sentido en relación con un proceso electoral con candidatos, con candidatas, con actos de autoridad de algún gobierno, y se ha establecido esta presunción de “espontaneidad” (que le han llamado) para poder determinar o no si se puede atribuir a los candidatos, candidatas o partidos políticos estas manifestaciones. Me parece esto muy delicado porque, incluso, pues algún oponente, válidamente, puede hacer valer alguna campaña para tratar de imputar esto a su contrincante y, de ahí, obtener ciertas ventajas del proceso electoral, que

lamentablemente en México es, en gran medida, jurisdiccional. Esta es una anomalía que espero que algún día podamos superar. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo juzgaría, cómo ponderaría usted, como Magistrada de la Sala Superior, este conflicto de redes sociales, libertad de expresión y los derechos de candidatas, candidatos y partidos políticos? Gracias de antemano por su respuesta.

SEÑORA LICENCIADA VALLE AGUILASOCHO: Muchas gracias a usted, señor Ministro. ¿Cuál es la opinión que tengo respecto al conflicto de las redes sociales, la libertad de expresión y respecto de su efecto que pueden tener en los procesos electorales? En primer lugar, soy una convencida que la ciudadanía requiere espacios de expresión y la libertad para que la ciudadanía ejerza este derecho se debe de garantizar. No solo está previsto así en el plano convencional: también en el plano constitucional, de ahí que las restricciones constitucionales y convencionales son limitadas.

De frente a ello, existe una presunción de que están amparadas bajo este derecho todas las expresiones, las ideas y las opiniones que giren en torno a los aspectos o asuntos de interés público. La política debe ser evaluada. Las redes sociales son un espacio en el que esto ocurre. La ciudadanía debe evaluar a sus candidatos y candidatas y también debe de evaluar la actuación de las autoridades electas, de ahí que la máxima oportunidad que tenemos, como una sociedad que aspira a seguir siendo democrática, es permitir este debate.

De frente a las candidaturas y a las reglas que rigen la equidad en la contienda y el principio de legalidad, efectivamente, en el orden de la normativa electoral existen algunos supuestos en los cuales

se pueden incurrir en ilícitos administrativos electorales. Estos no deben estar dirigidos *prima facie* a la ciudadanía.

También, respecto de ellos debe existir esta relación de espontaneidad, que solo puede ser derrotada cuando existan elementos objetivos suficientes que permitan identificar el uso de estas cuentas, inclusive, por usuarios no identificados o por alias o pseudónimos para ser reales campañas negativas o positivas a favor o en contra de una candidatura, con lo cual se da el supuesto de incidencia indebida a los procesos electorales.

Las candidatas y los candidatos, los partidos políticos tienen un deber, como entes de interés público, en términos del 41 de la Constitución de vigilar que los principios electorales se cumplan, entre ellos, el principio de legalidad, por eso tienen una calidad de garantes para que estas reglas no sean vulneradas, y este deber de garante se da una instrumentación en la norma electoral para que se cumpla a partir de la culpa *in vigilando* y lo que he denominado “una eximente de responsabilidad válida”, que se trata del deslinde eficaz. En esta conjunción y en esta armonía, la ciudadanía deberá expresarse libremente. Deberemos las autoridades garantizar este debate vigoroso, que la democracia se ejerza también en la expresión y en el plano de las reglas electorales, vigilar solamente el cumplimiento formal y, como garantes, tienen los actores principales, las autoridades no podemos ser censuradores de la libertad, como tampoco censuradores de la democracia. Esa sería mi respuesta, gracias.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Corresponde comparecer a la aspirante número 12, Villafuerte Coello Gabriela.

SEÑORA LICENCIADA VILLAFUERTE COELLO: Muy buenas tardes.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Buenas tardes. Adelante, por favor.

SEÑORA LICENCIADA VILLAFUERTE COELLO: Muy buenas tardes, señora Ministra Presidenta, señoras Ministras, señores Ministros. Les manifiesto mi infinita gratitud por darme la oportunidad de comparecer ante ustedes.

La jurisdicción electoral nos muestra que sus sentencias tienen poder individual, pero sin duda que inciden en lo colectivo. La selección de los criterios tuvo como propósito focalizar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de obtener una respuesta que genere certeza y seguridad jurídica y como una acción necesaria: la materialización eficiente y eficaz de lo juzgado.

En primer término, elegí la contradicción de criterios 228/2022 porque el efecto material de la sentencia de esta Suprema Corte es claro y contundente: no se puede exigir este requisito al funcionariado público y tampoco corresponde a las personas operadoras de justicia dotarlo de contenido. Esta decisión impacta a toda la sociedad porque le brinda certeza que, a quienes elija para un cargo público, permanecerán en él, salvo que haya situaciones excepcionales que acarren una consecuencia diversa. Quien aspire

a un cargo público sabe de antemano que ese requisito no le es exigible. También hay seguridad que, en los procedimientos sancionadores, no se evaluará tener o no un modo honesto de vivir. Así, vemos materializada la autoridad de la cosa juzgada. Hay un deber generalizado de cumplir con esta sentencia y, con ello, se consolidan los derechos humanos derivados de los artículos 17 y 35 de la Constitución. En contraste, me referiré al recurso del procedimiento especial sancionador 500/2022, que también aborda temáticas referentes al servicio público, en su vertiente de cumplimiento de las sentencias. En este asunto, la Sala Superior determinó que, cuando haya responsabilidad administrativa, solo procede dar vista porque no hay facultad para obligar a las autoridades a imponer alguna sanción, porque las sentencias son declarativas.

En mi opinión, se requiere de una ruta de interpretación diversa y explicaré por qué. El artículo 109, fracción III, de la Constitución dispone de manera imperativa que se aplicarán sanciones a las personas del servicio público cuando afecten los principios que rigen su actuación. El artículo 134, párrafos siete y ocho, establecen las obligaciones del servicio público en materia electoral. Su párrafo noveno indica que serán las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, las que garantizarán el cumplimiento, es decir, el régimen de sanciones. El diseño legal del procedimiento especial sancionador indica que se analiza en sede jurisdiccional y se resuelve en sede administrativa, con la vista que se da a las autoridades conforme a sus leyes aplicables.

Considero que estas referencias constitucionales y legales permiten afirmar que este tipo de sentencias no son declarativas: son de

cumplimiento forzoso y se debe dotar a los órganos jurisdiccionales para verificar su cumplimiento. Lo contrario desnaturaliza la cosa juzgada. Se corre el riesgo de generar un régimen de excepción; pero, sobre todo, se atenta contra el derecho humano a una tutela judicial efectiva.

Para concluir, me parece oportuno redireccionar los criterios para que se pueda verificar el cumplimiento de estas sentencias en beneficio de la sociedad. El régimen democrático se beneficia con esta propuesta: en los órganos jurisdiccionales, optimizar los recursos humanos y materiales con que se cuenta para lograr el cumplimiento eficaz.

Las sentencias en materia electoral son la antesala de una justicia social restaurativa, pues moldean la política y las relaciones de poder, impactan en la vida diaria en la convivencia ciudadana y son un instrumento para el cambio social; por ello, deben ejecutarse eficazmente. Muchísimas gracias por su atención.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Muchas gracias. Ministro Laynez, por favor.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, Ministra Presidenta. Magistrada, buenas tardes. De alguna manera, vi... creo que ya contestó mi pregunta, pero (sin embargo), por lo poco de tiempo yo sí quiero entrar un poco más al detalle.

A ver, entiendo que la Sala Superior ya resolvió que, conforme el artículo, que es el 247 (me parece)... 457 (perdón) de la LGIPE, tienen que ser declarativas, es decir, que lo contrario es invasivo,

incluso, es decir, rompería el principio de legalidad, lo que nos lleva a decir: bueno, si ese es el caso, entonces tendríamos que esperar que el legislador decida modificar la legislación para darle contenido. Lo que hace que, hoy en día, finalmente en persona, individuos, cuando ya está aprobado, después de todo el procedimiento electoral, ante autoridad electoral, que hubo una indebida participación, una indebida promoción contraria a la Constitución y a la ley, pues de todas maneras los órganos internos entran en aplicación con la Ley General de Responsabilidades, o su ley de responsabilidades y dicen: yo no encuentro nada.

Entonces hay dos vías: o esperamos a que el legislador o la otra es su posición (entiendo que es contraria a la de la Sala Superior). Entonces, mi pregunta: ¿usted hubiera votado en contra de esto? Es decir, bueno, usted explíqueme un poco. Entiendo que para usted, a pesar del que diga que dará vista para que proceda, no significa que reabra, sino significa que ejecuta, ¿es correcto?

Y, muy brevemente, segundo, sí me gustaría, dada la trascendencia... siempre, ¿no?, todas las elecciones son complicadas, ¿no?, pero (digamos) la trascendencia que supone la integración total de la Sala Superior para el proceso del año siguiente: ¿cómo también o de qué manera la Sala Superior debe de transmitir esa seguridad a la ciudadanía que, lo que hace, lo hace bien, y que lo que determinó lo hizo conforme a la Constitución? Gracias.

SEÑORA LICENCIADA VILLAFUERTE COELLO: Gracias, señor Ministro. Bueno, me parece que el régimen administrativo de las personas del servicio público se estableció con mayor contundencia

a partir de la adición en dos mil siete de los párrafos siete y ocho y noveno del artículo 134 y, después, fue ya en dos mil catorce cuando en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales están como sujetos obligados las personas del servicio público.

En la propia ley se establece el catálogo posible de infracciones que pueden cometer, que es un poco el reiterar, repetir los párrafos siete y ocho con una adición última, que tiene que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género y, en el 457, todo el catálogo de personas que son sujetas a la materia electoral. Tienen en la propia ley el catálogo de sanciones y está el artículo 457. Esto, yo creo que fue porque, bueno, lo que quiero entender es que le iban a mandar los asuntos derivados del propio párrafo noveno, del 134 para que las autoridades, las contralorías internas, a ver, el expediente le dieran trámite, pero ya no a reabrieran el caso. ¿Por qué? Porque la facultad de analizar la responsabilidad, en sede en materia electoral, corresponde a las autoridades electorales. Así está el diseño de la ley, incluso, replicado en las treinta y dos entidades federativas. Entonces, esta vista, que en teoría tendría que ser para calificar e individualizar la sanción, en la práctica lo que vemos es que las autoridades no proceden a ejecutar la sanción. Entonces, por eso hice el énfasis en el párrafo noveno y en el 109, fracción III, porque habla de que se aplicarán sanciones, es decir, ante una conducta irregular de las personas del servicio público, el régimen democrático y la legalidad, en general. Se requiere que esas personas tengan una sanción conforme a las leyes que tiene el servicio público.

A mí me parece que eso le da solidez al sistema. Claro que las autoridades jurisdiccionales debemos de ser muy minuciosas, muy escrupulosas al establecer una infracción, precisamente, porque de lo que se trata es que tenga legitimidad y que se ejecute. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que tenemos una, simplemente por darles un número, llegaron en agosto cerca de trescientos cincuenta asuntos en esta materia, que no se ejecutan, de manera que no hay sanción. Entonces, ¿qué significa? Que la ciudadanía se queda sin entender por qué se dice que alguien infraccionó y de esa infracción no hay una sanción. Entonces, para mí se debilita el régimen y la credibilidad en las autoridades jurisdiccionales en para que sepan lo que sucede. Entiendo que es una lógica, una dinámica compleja este diseño, pero si... (digo también en mi ensayo), que el socio, que es el Poder Legislativo, podría actuar en esa materia, pero no tenemos la actuación para precisar, y lo que sucede es un poco lo que pasa con el 134, ante la falta de leyes al respecto, ha tenido que ser a través de las sentencias.

Entonces, yo creo que, con esta interpretación que me permito poner a, pues, a conocimiento de ustedes, de mi criterio sobre este tema, le damos solidez al sistema para que seamos las personas juzgadoras las que llevemos a cabo un juzgamiento escrupuloso y sean las autoridades las que también cumplan porque, al final, el servicio público completo se debe a la ciudadanía. Por eso, muchas veces la ciudadanía está a la espera de esas respuestas contundentes en relación a las personas del servicio público, útil también porque también las personas del servicio público sabrán cuáles son las consecuencias materiales de cometer una infracción a las leyes en materia electoral. Y eso me parece que, en un futuro, pues en la Sala Superior tenemos que verificar todos estos criterios

y, por eso, hablo de darles herramientas a las autoridades jurisdiccionales para verificar el cumplimiento, solo para verificarlo.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias.

SEÑORA LICENCIADA VILLAFUERTE COELLO: Gracias, gracias.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Ministros, gracias. Han concluido las comparecencias y quiero reiterar el reconocimiento y felicitar a cada una y uno de ustedes por su participación en este proceso. Sírvase, señor secretario, entregar los tarjetones amarillos, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Le pediría ahora que recoja los tarjetones sellados a cada uno de las Ministras y los Ministros, y que haga entrega de las listas para las votaciones, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: En este momento, designo como escrutadores a los Ministros Presidentes de la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, el Ministro Pardo y el Ministro Pérez Dayán.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 1.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 1.

Lista de aspirantes mujeres.

1. MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número 1. Lista de aspirantes mujeres.

1. MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

3. GABRIELA VILLAFUERTE COELLO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. GABRIELA VILLAFUERTE COELLO.

Lista de aspirantes hombres.

1. RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lista de aspirantes hombres.

1. RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

2. JUAN CARLOS SILVA ADAYA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. JUAN CARLOS SILVA ADAYA.

3. ENRIQUE SUMUANO CANCINO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. ENRIQUE SUMUANO CANCINO.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Continuamos. Si no hay alguna objeción ni en este ni en los sucesivos, proceda a la destrucción del tarjetón una vez leído, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 2.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número 2. Lista de aspirantes mujeres.

1. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 2. Lista de aspirantes mujeres.

1. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

2. MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

3. BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.

Lista de aspirantes hombres.

1. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes hombres.

1. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ.
2. ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ.
3. ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 3.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 3.
Lista de aspirantes mujeres.

1. ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes mujeres.

1. ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.
2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

3. GABRIELA VILLAFUERTE COELLO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. GABRIELA VILLAFUERTE COELLO.

Lista de aspirantes hombres.

1. RUBÉN LARA PATRÓN.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lista de aspirantes hombres.

1. RUBÉN LARA PATRÓN.

2. ARMANDO MAITRET HERNÁNDEZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. ARMANDO MAITRET HERNÁNDEZ.

3. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número cuatro 4.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número cuatro 4.

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

3. MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA.

Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

2. LARA PATRÓN RUBÉN.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. LARA PATRÓN RUBÉN.

3. SUMUANO CANCINO ENRIQUE.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. SUMUANO CANCINO ENRIQUE.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 5.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 5.

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA.

2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO.

3. ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ.

Lista de aspirantes hombres.

1. ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lista de aspirantes

hombres.

1. ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.

2. JUAN CARLOS SILVA ADAYA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. JUAN CARLOS SILVA ADAYA.

3. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 6.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número 6. Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 6. Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA.

2. VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA.

3. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

Lista de aspirantes hombres.

1. LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes hombres.

1. LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS.

2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL.

3. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 7.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 7.

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMINGUEZ MARCELA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

Tarjetón número 7.

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.
2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.
3. VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA.

Lista de aspirantes hombres.

1. LARA PATRÓN RUBÉN.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

Lista de aspirantes hombres.

1. LARA PATRÓN RUBÉN.
2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.
3. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 8.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número 8.

Lista de aspirantes mujeres.

1. MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Tarjetón número 8.

Lista de aspirantes mujeres.

1. MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA.

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

3. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.

Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

2. LARA PATRÓN RUBÉN.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. LARA PATRÓN RUBÉN.

3. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 9.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

Tarjetón número 9.

Lista de aspirantes mujeres.

1. DORA ALICIA MARTÍNEZ.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

Tarjetón número 9.

Lista de aspirantes mujeres.

1. DORA ALICIA MARTÍNEZ.

2. CLAUDIA VALLE A.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. CLAUDIA VALLE A.

3. GABRIELA VILLAFUERTE.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. GABRIELA VILLAFUERTE.

Lista de aspirantes hombres.

1. ENRIQUE FIGUEROA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

Lista de aspirantes hombres.

1. ENRIQUE FIGUEROA.

2. JESÚS LARA PATRÓN.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. JESÚS R. LARA PATRÓN.
3. ARMANDO MAITRET.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. ARMANDO MAITRET.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tarjetón número 10.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Tarjetón número 10.

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

Lista de aspirantes mujeres.

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA E.
2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

2. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.
3. MARTÍNEZ VALERO DORA A.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

3. MARTÍNEZ VALERO DORA A.

Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Lista de aspirantes hombres.

1. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO.
2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO:

2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO.
3. LARA PATRÓN RUBÉN.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:

3. LARA PATRÓN RUBÉN.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señora Ministra Presidenta, si me permite darle los resultados:

La terna para mujeres:

Fernández Domínguez Marcela Elena, ocho votos; Villafuerte Coello Gabriela, ocho votos; y Valle Aguilasocho Claudia, siete votos.

En el caso de la terna para hombres:

Lara Patrón Rubén Jesús, ocho votos; Sandoval López Francisco Javier, ocho votos; y Maitret Hernández Armando Ismael, siete votos.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Dado que los resultados de la votación arrojan los tres aspirantes con mayor número de votos en cada terna, por favor, secretario, dé lectura a las ternas en orden alfabético de su primer apellido, empezando por las mujeres.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta:

1. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA.
2. VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA.
3. VILLAFUERTE COELLO GABRIELA.

Terna de hombres:

1. LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS.
2. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL.
3. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: ¿Están ustedes de acuerdo con las ternas? ¿Podemos aprobarlas en votación económica? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDAN APROBADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Y muchas gracias.

QUEDAN APROBADAS LAS TERNAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 179, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

De esta manera, instruyo al Secretario General de Acuerdos a remitir las ternas aprobadas al Senado de la República, en términos de lo dispuesto en el inciso b) del numeral y el punto cuarto del Acuerdo 5/2023.

Señoras y señores, agotado el objetivo de esta sesión, voy a proceder a levantarla y las y los convoco a nuestra próxima sesión pública solemne, que tendrá verificativo el día de mañana a las doce horas. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:05 HORAS)